



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

///doba, 24 de julio de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"DENUNCIADO: BUNGE ARGENTINA S.A. Y OTRO s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP-DGI" (Expte. FCB 8749/2019/CA3)**, venidos a conocimiento de esta Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la señora Fiscal Federal de Villa María, Dra. María M. Schianni, junto al señor Fiscal Federal Coadyuvante Dr. Carlos Gonella, en contra de la resolución dictada por el Juzgado Federal de Villa María con fecha 19 de diciembre de 2019, en cuanto dispuso: *"Villa María, 19 de diciembre de 2019. Y VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: I.- DISPONER la FALTA DE MERITO del imputado Plácido Enrique HUMANES, en su calidad de Presidente de la firma "Bunge Argentina S.A." al momento de los hechos, cuyas demás condiciones personales han sido referidas supra, en orden a los hechos atribuidos por los requerimientos fiscales de instrucción de fojas 18/19 y 196/197, hechos por los que fuera oportunamente indagado, conforme lo dispone el art. 309 en función del art. 306 ambos del C.P.P.N. II.- Regístrese, hágase saber y remítase a la Sede del Ministerio Público Fiscal a fin de que su titular continúe con la instrucción de los hechos, conforme delegación dispuesta en el proveído de fs. 15."* (Fdo. Roque Ramón Rebak -Juez Federal- y Facundo Sadi -Secretario-).

Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan estos autos a conocimiento de esta Alzada en virtud de los recursos de apelación deducidos por los representantes del Ministerio Público Fiscal y de

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

USO OFICIAL

la parte querellante AFIP-DGI en contra de la resolución dictada por el Juzgado Federal de Villa María, mediante la cual se dispuso la falta de mérito del imputado Plácido Enrique Humanes en orden a los hechos que le fueran atribuidos en los requerimientos fiscales de instrucción de fojas 18/19 y 196/197, calificados provisionalmente como "evasión al impuesto a las salidas no documentadas agravado por el uso de facturas apócrifas" (conf. art. 2, inc. d) en función del art. 13 del Régimen Penal Tributario s/Ley 27.430).

II.- Para así decidir, el señor Juez Federal de primera instancia sostuvo que no se encuentra probado con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, que la conducta del imputado Humanes haya estado precedida por el dolo requerido por el tipo de injusto. En particular, que el imputado Plácido Enrique Humanes, en su calidad de presidente de la firma "Bunge Argentina S.A.", haya comercializado con las firmas "Lemos, Lobestein y Asociados S.A." (en adelante, Lemos) y "Porte SRL" (en adelante, Porte) con conocimiento del carácter apócrifo de dichas compañías y con la intención de defraudar al fisco nacional.

De este modo, el magistrado valoró el material probatorio invocado por la defensa técnica y la circunstancia de que, de la inspección realizada por el organismo fiscalizador como de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal, no surgen datos objetivos que permitan conjeturar -con la probabilidad exigida para el dictado de procesamiento- el dolo del imputado Humanes.

Al respecto, reiteró que, con base en los indicios indicados por la defensa y ponderados tanto por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

Córdoba al resolver tiempo atrás la situación procesal del imputado (más precisamente con fecha 1.06.2021), el extremo subjetivo del tipo debe ser motivo y objeto de investigación. En particular, consideró que debe practicarse una pericia contable para determinar la incidencia de las operaciones en el giro ordinario de los negocios de la contribuyente.

En virtud de lo expuesto, el señor Juez Federal de Villa María consideró que la solución procesal adecuada a derecho es la declaración de falta de mérito (conf. 309 del CPPN).

III.- En contra de dicha resolución, los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante AFIP-DGI presentaron sendos recursos de apelación (fs. 569/578 y 579/585, respectivamente).

a) Apelación del Ministerio Público Fiscal:

En su libelo recursivo, los representantes del Ministerio Público Fiscal, Dres. María Marta Schianni y Carlos Gonella, señalaron que la resolución causa agravio por cuanto dispuso la falta de mérito de Plácido Enrique Humanes, pues considera que se apoya en fundamentos aparentes, que no se condicen con una valoración integral de las constancias de autos, lo cual afectaría la validez de la resolución. En efecto, considera que, correctamente analizadas las pruebas colectadas, debió dictarse el procesamiento del imputado en los términos del art. 306 del CPPN.

Al respecto, la titular de la acción penal sostuvo que el señor Juez Federal realizó un análisis formal de las manifestaciones desincriminatorias formuladas por la defensa (desconocimiento del carácter

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

apócrifo de las empresas contratadas, basado en el correcto registro formal ante el fisco); exigiendo para desvirtuar tales inferencias, pruebas directas que den cuenta del entramado delictivo pergeñado entre las firmas y los intermediarios que permanecieron ocultos, cuando por la fecha en la que se logró advertir la maniobra, tales pruebas resultan de imposible producción.

Sin embargo, entiende que se cuenta en autos con indicios unívocos, múltiples y serios, que presentan anclaje objetivo en elementos de prueba independiente para tener por acreditados, con el grado de probabilidad exigido para el dictado del auto de procesamiento, tanto la existencia del hecho como la participación penalmente responsable del imputado Humanes.

En este sentido, manifiestan que el empleo de firmas o empresas apócrifas por parte de grandes empresas como Bunge Argentina S.A., no se genera por engaño, error u omisión de controles, pues el nacimiento de estas estructuras que permiten ocultar a los operadores reales, responde a las exigencias del mercado y particularmente de las grandes empresas que precisan reducir los costos de producción. Además de ello, entienden que dicho conocimiento puede inferirse de la situación de las firmas.

Con relación al verdadero productor del cereal que era acopiado por la firma "Lemos", se pudo corroborar que el 100% de los proveedores informados (quienes supuestamente remitieron granos a dicho acopio), se encuentran en la base e-Apoc de AFIP, o bien fueron observados durante el Operativo Granos por una serie de múltiples inconsistencias; constatándose que muchos de los dominios de los vehículos que figuran en las cartas de porte utilizadas, responden a rodados no aptos para el

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

transporte de mercaderías por cuanto son automóviles para el transporte de personas.

Considerando que el magistrado instructor ha indicado que la labor de “Lemos” sería solo la de intermediario, la inferencia en cuestión queda descartada al analizar que la firma declaró solo tres empleados, un número insuficiente para hacer frente a las actividades que manifiesta realizar; sus acreditaciones bancarias eran notoriamente superiores a sus ventas declaradas y poseía un activo de escasa relevancia y de fácil realización, no poseyendo ningún bien registrable a su nombre.

En efecto, del informe presentado por el fisco (incorporado al sistema lex100 bajo la denominación “DEO: 9016110 - OFICIO COMUNICACIÓN - 60000000992 - AFIP - DGI - DIRECCIÓN REGIONAL RÍO CUARTO”), se desprendería que, del total de vehículos informados por PORTE SRL -en su relación comercial con BUNGE ARGENTINA S.A-, en las CTG emitidas, aproximadamente un 34% de ellos eran vehículos utilitarios o sin capacidad para el transporte de granos.

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal refuta el argumento relativo a que las operaciones cuestionadas tuvieron lugar con anterioridad a la exclusión de las firmas aludidas del Registro de Operadores de Granos y su inclusión como APOC; incluso de considerarse que los montos consignados en las facturas efectivamente se abonaron; que las operaciones existieron no resulta óbice para el dictado del auto de procesamiento. Pues la inclusión de las firmas en la base APOC se efectuó al corroborarse, por medio de inspecciones, una irregularidad que no podía ser advertida por el Fisco mediante un simple cotejo documental

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

(fs.73/75). En ese marco, se infiere que la inclusión poseerá efectos retroactivos según el grado de irregularidad advertida.

En este punto, la parte acusadora afirma que, desde sus orígenes, estas empresas constituyeron simples estructuras creadas con único objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones fiscales tanto propias como de terceros, permitiendo a su vez a estos terceros que operan con ellas, obtener un beneficio ilícito consistente en la devolución de retenciones de IVA, que las empresas apócrifas nunca ingresaron a las arcas del Estado.

Siendo ello así, las afirmaciones relativas a que al momento de las operaciones las firmas "Lemos, Lobenstein y Asociados S.A." y "Porte SRL" se encontraban inscriptas en el Registro Fiscal de Operadores de Granos y que "BUNGE ARGENTINA S.A." no volvió a operar con posterioridad a que los proveedores hayan sido dados de baja en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, carecen de la entidad que se pretende otorgar, pues constituyen requisitos necesarios e indispensables para concretar las operaciones investigadas, dado que sin esas habilitaciones no podrían facturar ni operar en el rubro.

En el mismo sentido, que efectivamente se hayan materializado los pagos mediante depósitos en las cuentas de las firmas apócrifas, también resulta un elemento esencial para dotar de apariencia de veracidad a la maniobra y de por sí carece del alcance que pretende darle la defensa, pues conforme se desprende de fs. 6/vta. a 7, dichas acreditaciones eran automáticamente retiradas en efectivo y, afirman, el dinero remitido por esa vía, era restituido a la empresa en efectivo, sin quedar registro formal en la empresa, o bien por medio de cheques de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

terceros, que carecen de causa y que por tal motivo impiden corroborar su contraprestación.

Con relación a otros indicios que permiten inferir el dolo, la recurrente consideró que Habiendo despejado las dudas respecto de la condición de meras pantallas o empresas apócrifas con las que contrató Humanes, respecto al error o engaño, en el cual el magistrado considera que ha caído el imputado, se debe indicar que este error no es esperable de quien dirige empresas de la envergadura que posee Bunge Argentina S.A., pues se trata de operaciones comerciales de entidad, que implican una suma importante de dinero, que se están confiando a firmas que no poseían, trayectoria, inmuebles, cartelería o publicidad; que tampoco contaban con automóviles o camiones; que los rodados consignados en las cartas de porte responden a vehículos no aptos para el transporte de mercaderías o se encuentran registrados a nombre de personas físicas o jurídicas que no se corresponden con la empresa en cuestión.

De este modo, los Dres. Schianni y Gonella entienden que el imputado Humanes no desconocía esta situación, sino que se aprovechó de ella para disminuir los costos de la empresa, al aparentar operaciones comerciales que, si bien quedaban documentadas y eran abonadas, todo ello constituía una mera pantalla, pues no eran llevadas a cabo por las firmas, dado que nunca tuvieron capacidad económica ni financiera para realizarlas.

Finalmente, los representantes del Ministerio Público Fiscal expresaron, con relación a la pertinencia y utilidad de las pruebas indicadas por el magistrado

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

USO OFICIAL

interviniente, que el hecho de que no se hayan dispuesto las tareas periciales indicadas en la resolución, en modo alguno obsta al dictado del auto de procesamiento solicitado. En tal sentido, **el tipo penal se configura con independencia del patrimonio o del volumen de actividades que desarrolle la empresa.** Por lo que la pericial en cuestión, **solo tendría por efecto dilatar innecesariamente la presente investigación,** sin aportar información de relevancia para este legajo.

Finalmente, el hecho de que las operaciones observadas no representen un gran porcentaje dentro del total de actividades llevadas a cabo por la firma Bunge Argentina S.A., también responde al hecho de que mantener un margen pequeño de actividades permite evitar que las alertas por irregularidades lleguen al fisco en forma temprana.

Con ello, los magistrados del Ministerio Público Fiscal advierten que *"no resulta indispensable verificar detalles como: cantidad de operaciones con comprobantes apócrifos versus los genuinos, el rédito, ganancia o beneficio que traería aparejada su realización"* (Sic).

Por su parte, en lo que respecta a la existencia o no de controles internos y protocolos de prevención del fraude fiscal que hubieran permitido documentar los distintos segmentos de contratación y supervisión, los apelantes afirman que estos evidentemente no operaron para evitar el fraude, pues en las CTG emitidas, aproximadamente un 34% de ellas eran vehículos utilitarios o sin capacidad para el transporte de granos y esta circunstancia debió ser conocida por "BUNGE" al receptar y confirmar la operación en cuestión (fs. 2622; 2625; 2643; 2650 -del anexo identificado como Cuerpo 14 y como Cuerpo

36, entre aquellas informadas en los cuerpos 23 a 35, que

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

fueran precisadas por AFIP en su respuesta registrada bajo el DEO: 9016110).

Por todo lo expuesto, solicito se tenga por interpuesto el recurso de apelación y se eleven los autos a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, a sus efectos.

b) Apelación de la parte querellante AFIP-DGI:

A su turno, los representantes de la querellante interpusieron recurso de apelación. En dicha oportunidad procesal, indicaron que causa agravio la resolución dictada por el Magistrado Instructor en cuanto entiende que se realiza una errónea interpretación de los hechos, ya que el a-quo no efectuó un correcto análisis de la prueba recabada hasta el momento en el proceso, y en base a dicho error resolvió dictar la falta de mérito del imputado, por lo que no constituye una derivación razonada del derecho vigente.

En suma, la resolución en crisis resulta a su criterio inmotivada, pues la querellante entiende que, al contrario de lo sostenido por el juez de instrucción, existen en la causa sobrados elementos para dictar contra el imputado el auto de procesamiento por los hechos detallados en la denuncia, presentaciones realizadas por este Organismo fiscal y por las requisitorias fiscales obrante en autos.

En su pretensión impugnativa, objetó la resolución por errónea valoración de los elementos de cargo y por errónea interpretación de la pertinencia sobre las medidas de prueba pretendidas por la defensa.

Respecto de este último punto, cuestionó de qué manera haría caer el tipo penal reprochado en autos el

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

hecho de que, a través de una pericia contable se arribe a la conclusión de que los montos de las operaciones cuestionadas en relación con los montos totales de operaciones similares verificadas por la empresa aparecerían como ínfimos.

La apelante considera que cualquiera sea el resultado al que se arribe, deviene irrelevante. Al respecto, afirma que la maniobra se materializó, y la circunstancia del monto y/o beneficio que traería aparejada la realización de operaciones con comprobantes apócrifos vs. los genuinos no resiste análisis alguno.

Así, entiende que dicho posicionamiento implicaría alejarse diametralmente del objeto procesal que se ventila en autos, esto es, haber operado con firmas manifiestamente apócrifas para socavar la base imponible, evadiendo el pago del tributo salidas no documentadas.

En ese entendimiento, la parte querellante se opone abiertamente a seguir con medidas de instrucción que sean irrelevantes para erigirse como "prueba de descargo" apta, como la antes apuntada o la que hace referencia a las testimoniales pretendidas para los choferes transportistas para determinar el circuito físico del cereal o a los empleados de la empresa que dé cuenta de la existencia de mecanismos estandarizados de prevención del fraude fiscal y su cumplimiento.

En definitiva, solicita a la Cámara Federal que revoque la resolución apelada de fecha de fecha 14 de septiembre del 2023. Formula reservas de casación y del caso federal.

IV.- Radicados los autos en esta Alzada, se dispuso el emplazamiento de las partes para la presentación de los informes de agravios o mejoramiento de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

fundamentos por escrito, en los términos previstos en el art. 454 del CPPN y Acuerdo N° 276/2008.

El señor Fiscal General ante esta Cámara Federal de Apelaciones, tras mantener el recurso deducido, presentó su memorial de agravios glosado a fs. 592/600; por su parte, la parte querellante AFIP-DGI acompañó el informe de agravios a fs. 623/635, en ambos casos replicando los fundamentos dados en oportunidad de la interposición de los recursos y a los que se remite en honor a la brevedad.

A su turno, la defensa técnica del imputado Plácido Enrique Humanes, ejercida por los Dres. Marcelo Nicolás Fernández Alsina y José María Figuerero, presentó escrito de mejoramiento de fundamentos solicitando el rechazo de los recursos de apelación interpuestos por el acusador público y privado, exponiendo los antecedentes de la causa y las razones que abonan su pretensión, a cuya lectura se remite (fs. 602/622).

V.- Sentadas así y reseñadas en los precedentes párrafos las posturas asumidas por las partes, corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de los recursos de apelación articulados. A tal efecto, se sigue el orden de votación establecido, según el cual corresponde expedirse en primer término al doctor Abel G. Sánchez Torres, en segundo lugar, a la doctora Liliana Navarro y, por último, a la doctora Graciela Montesi (conf. certificación actuarial a fs. 636 y decreto a fs. 638).

El señor Juez de Cámara doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

Abocado al estudio de las presentes actuaciones, corresponde resolver con el límite impuesto por los



agravios indicados por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante AFIP-DGI y en función de las constancias de autos, sobre la corrección y suficiencia de esta nueva falta de mérito dispuesta en favor del imputado Plácido Enrique Humanes, a quien se le atribuye la comisión del delito de "evasión al impuesto a las salidas no documentadas agravado por la utilización de facturas apócrifas", en su carácter de Presidente del Directorio de la contribuyente Bunge Argentina S.A. -períodos fiscales 2011, 2012 y 2013-, y si dichas conclusiones se presentan como una derivación razonada del derecho vigente afincada en las circunstancias comprobadas en autos (art. 2 inc. d) y 13 del Régimen Penal Tributario, conf. Ley 27.430; arts. 45 y 55 del Código Penal; y arts. 309 del Código Procesal Penal de la Nación).

Previo a ingresar en el análisis de la procedencia de las apelaciones deducidas, es necesario examinar el recorrido procesal seguido hasta el momento para establecer la regularidad y legalidad del proceso, habida cuenta de que nos encontramos frente a una nueva elevación de la causa en apelación en contra del segundo dictado de falta de mérito con relación al imputado Humanes, dispuesta por el Juez Federal de Villa María por los mismos motivos y sin avance significativo de la Instrucción.

En efecto, con fecha 1.06.2021, este Tribunal de Alzada, con voto del suscripto y adhesión de la Dra. Navarro, dispuso la revocación de la falta de mérito dispuesta en su momento en favor de Plácido E. Humanes por el delito calificado provisionalmente como evasión al impuesto a las salidas no documentadas agravada por el uso de facturas apócrifas -tres hechos en concurso real-.

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

USO OFICIAL

En la resolución de esta Cámara Federal de Apelaciones, luego de efectuar un análisis circunstanciado de las evidencias reunidas en función del estándar convictivo requerido, dispuso la revocación del auto de mérito *"ponderando el material convictivo incorporado a los fines de sopesar el compromiso procesal del encausado en orden a la imputación que pesa en su contra, a la luz de las reglas de la sana crítica racional, **se vislumbra la escasez de actividad investigativa** que permita reconstruir los extremos jurídico-penales relevantes de los hechos, resultando prematuro -en el caso de autos- el dictado de resolución de mérito"* (Sic; el destacado me pertenece).

Seguidamente, se dispuso que el juez de primera instancia *"deberá profundizar la instrucción de la presente causa de acuerdo al marco normativo descripto en los párrafos precedentes, colectando evidencias suficientes para resolver la situación procesal del imputado, en los términos del art. 306, 309 o 334 del CPPN, según por derecho corresponda... En otras palabras, ante el auto de mérito dictado con base exclusiva en los elementos de convicción incorporados por la AFIP-DGI, sin que se haya producido prueba dirimente en sede judicial que corrobore sus conclusiones acerca de las conductas endilgadas, en particular sobre el aspecto subjetivo de los delitos enrostrados, resulta prudente disponer su revocación, debiendo intensificarse la investigación"* (Sic).

Vueltos los autos al juzgado de origen, con fecha 5.07.2021, el señor Juez titular del Juzgado Federal de Villa María rechazó la reasunción de la investigación y remitió el expediente a la Fiscalía para que continúe la

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

investigación en los términos de la delegación efectuada (art. 196 del CPPN). En este sentido, expresó: "... En cuanto a lo expuesto por la Alzada en su resolución de fecha 01/06/2021, referente a evaluar la necesidad o no de que este Tribunal reasuma la dirección de la presente causa, corresponde indicar que es criterio de esta Judicatura la delegación de la dirección de la investigación en el Ministerio Público Fiscal...".

A partir de allí, radicadas las actuaciones en sede de la Fiscalía Federal de Villa María, la defensa técnica presentó múltiples escritos -a la Fiscalía y al Juzgado- impetrando que se produzcan las medidas probatorias dispuestas por esta Cámara Federal de Apelaciones en la resolución del 1.06.2021, cuyo rechazo reiterado obra en autos y denuncia enfáticamente la defensa.

Por caso, con fecha 23.08.2021 la defensa técnica presentó ante la Fiscalía Federal de Villa María el escrito titulado: "MANIFIESTAN. SOLICITAN SE PRODUZCAN LAS MEDIDAS DE PRUEBA DISPUESTAS POR LA EXCMA. CÁMARA". Allí solicitaron expresamente se circunscriba la investigación a los hechos del proceso y se adopten las medidas probatorias dispuestas por la Alzada.

Vale recordar que, con respecto a la prueba, esta Cámara Federal de Apelaciones dispuso: "Como se advierte en los segmentos destacados, para la acreditación del conocimiento de la falsedad de los comprobantes apócrifos resulta necesario producir la prueba conducente a su dilucidación conforme los fines del proceso (art. 193, CPPN), resulte esta contraria o no a los intereses del imputado, tales como: pericia contable para definir, por ejemplo, "la magnitud del impuesto evadido y la reiteración de supuestas operaciones con los proveedores",

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

informes bancarios y registros de operaciones sospechosas para examinar la trazabilidad del circuito financiera de pagos, testimonios de las partes intervinientes en las operaciones -en particular, de los transportistas y/o los distintos camioneros existentes conforme las cartas de porte, para determinar el circuito físico del cereal-, documental y testimonial de los empleados de la empresa que dé cuenta de la existencia de mecanismos estandarizados de prevención del fraude fiscal y su cumplimiento, entre otras diligencias pertinentes y útiles según el caso”.

Asimismo, se señaló que “... los montos de las operaciones cuestionadas en relación con los montos totales de operaciones similares verificadas por la empresa aparecerían como ínfimos (...) extremo de interés que no ha sido corroborado por la Instrucción, **debiendo producirse la prueba pericial solicitada por la defensa.** Del mismo modo, circunstancias tales como la cantidad de operaciones con comprobantes apócrifos versus los genuinos, el rédito, ganancia o beneficio que traería aparejada su realización, puesto que se presentaría como el móvil delictivo, la existencia o no de controles internos y protocolos de prevención del fraude fiscal que hubieran permitido documentar los distintos segmentos de contratación y supervisión (según la defensa, poseen protocolos estandarizados de actuación pues son exigidos por la Controlante y manifiesta que se habrían cumplido), la existencia de habilitación de los distintos organismos estatales encargados de la fiscalización de la comercialización y tributación, entre otros” (extractos del voto del suscripto; el destacado me pertenece).

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

En este esquema, los defensores de Humanes expresaron ante la Fiscalía que "más allá de cualquier diligencia que estime necesario realizar la instrucción, siempre en el marco del objeto procesal definido en autos, resulta inexorable que se dé cumplimiento a lo ordenado por el Superior, realizando las medidas que allí se dispusieron..." (Sic, escrito de fecha 23.08.2021).

Cabe señalar, también, que mediante auto de fecha 1.10.2021, el Juzgado Federal de Villa María, a instancia de la defensa técnica del imputado Plácido E. Humanes, declaró la nulidad de las medidas probatorias dispuestas por la Fiscalía Federal, en tanto requería a AFIP-DGI la confección de sendos informes con relación a la contribuyente Bunge Argentina S.A., durante el período comprendido entre los años 2008 a 2017. Entre las medidas adoptadas, con fecha 3.08.2021 la señora Fiscal Federal Dra. María Marta Schianni había ordenado librar "oficio a AFIP a los fines de que informe las empresas - personas físicas y jurídicas - catalogadas como apócrifas, que han operado con la firma Bunge Argentina S.A. en el período 2008-2017. Asimismo solicito informe la cantidad de cartas de porte involucradas en dichas operaciones" (Sic).

Dicha resolución resultó confirmada por esta Cámara Federal de Apelaciones -por mayoría- mediante auto de fecha 11.10.2022, al rechazarse la apelación deducida por los señores Fiscales Dres. Schianni y Gonella intervinientes en este proceso. Allí, sostuve que "...el objeto procesal se encuentra perfectamente definido y delimitado. En este sentido, se investiga la responsabilidad penal por tres presuntos hechos de evasión al impuesto a las salidas no documentadas en los periodos fiscales 2011, 2012 y 2013, mediante la utilización de facturas apócrifas de dos empresas prestadoras de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

servicios, lo cual delimita los contornos de una investigación legítima por el Ministerio Público Fiscal y el Juez Instructor. Solo con elementos que se conozcan se puede avanzar en otros hechos” (Sic., voto del suscripto en “Incidente de nulidad en autos: HUMANES, Plácido Enrique por evasión agravada tributaria” Expte. FCB 8749/2019/1/CA2).

Continuando con el iter procesal, con fecha 31.07.2023 los abogados defensores se presentaron por escrito ante el Juez Federal de Villa María manifestando que la Fiscalía *“insiste con el pedido de procesamiento de nuestro defendido, formulando diversas consideraciones en virtud de las cuales se rechazan todos y cada uno de los argumentos ensayados por esta defensa, mientras que **se reitera la negativa a producir a producir ninguna de las pruebas pendientes en la causa, tanto las solicitadas por esta Defensa como -lo que es más grave- las ordenadas con precisión por la Excma. Cámara”** (Sic, el destacado me pertenece).*

En estos términos, la defensa advierte que *“el claro mandato del fallo emitido por la Excma. Cámara de Apelaciones, donde se encomendara la realización de amplias medidas de prueba para lograr acreditar los extremos vertidos en la denuncia, fue pasado por alto por la Fiscalía, que pareciera interpretar que los mandatos de los tribunales superiores pueden ser desobedecidos”* (Sic., el destacado me pertenece).

A modo de cierre, los señores abogados defensores Dres. Fernández Alsina y Figuerero expresaron *“invocamos entonces como hemos hecho en el pasado y continuamos solicitando ahora que **V.S. continúe ejerciendo***



su rol de juez de garantías ante la confusa postura asumida por la Fiscalía, que en lugar de adaptarse con equidad a las circunstancias del expediente y a la evolución de su panorama probatorio, trata constantemente de mudar el objeto procesal de la causa. Fracasada la tesis original, se intenta remediar el entuerto proponiendo otra y así sucesivamente. De ese modo el ejercicio del derecho de defensa en juicio se dificulta hasta lo imposible, ya que no existe la necesaria estabilidad procesal y todos los esfuerzos de la defensa son desatendidos. Por los argumentos expuestos, dejamos formulada, desde ya, nuestra oposición al nuevo pedido efectuado por la Fiscalía [insta procesamiento], el que implica a todas luces un apartamiento del pronunciamiento de la Excma. Cámara del 1° de junio de 2021 cuando ordenó profundizar la investigación" (Sic, el destacado me pertenece).

Luego, con fecha 24.08.2023, los letrados presentaron ante el señor Juez Federal de Villa María un nuevo escrito, motivado en el pedido de procesamiento de la Fiscalía expresando que "pese al claro mandato de V.S. y de la Cámara de Apelaciones... Lamentablemente el Ministerio Público actuante parece no **reconocer la jurisdicción ni la competencia de la Excma. Cámara para imponer medidas de cumplimiento inexorable, trastocando así la organización y jerarquía de la Justicia Federal** (arts. 449 y cc. del CPPN, y 26, 31 y cc. del DL 1285/58). En tal sentido, dejamos **expresa reserva de nulidad dado que de así procederse, se estarían violando normas relativas a la capacidad de los jueces y fiscales,** supuesto fulminado por el art. 167, inc. 1° el ritual, lo cual debe evitarse conforme lo dispuesto por el art. 168 del mismo cuerpo legal. Por otra parte, la actuación que

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

USO OFICIAL

venimos reclamando resulta también consecuencia de la aplicación armónica de las normas que regulan el punto, teniendo en cuenta que **el Sr. Juez actuante también debe aplicar su criterio, ya que él y no a otro funcionario está dirigido el art. 304 CPPN que justamente dispone: 'el juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado '...' (Sic; el destacado me pertenece).**

Por su parte, no resulta menor que el señor Juez Federal de Villa María reconoce estos déficits y direccionamientos investigativos en el auto ahora apelado, en el cual textualmente expresa: "Que, resueltas por esta dependencia judicial y la Cámara Federal otras vicisitudes que se presentaron en el marco de la ampliación de la investigación (véase incidente de nulidad FCB 8749/2019/1), el Ministerio Público Fiscal llevó a cabo dos nuevas medidas probatorias: **a)** un pedido de informe a la AFIP sobre las cartas de porte emitidas, autorizadas o confirmadas por "BUNGE" (...) y **b)** la citación al inspector de la AFIP Marcos Oscar CREMA para que amplíe su declaración testimonial (...) Que, pese al esfuerzo puesto por el Ministerio Público Fiscal en ampliar la investigación con la incorporación de las dos medidas probatorias detalladas en el párrafo anterior, esta judicatura considera que no se encuentra demostrado en autos, con el grado de probabilidad requerido para el dictado de un procesamiento, que la conducta del imputado HUMANES haya estado precedida por el dolo que requiere el tipo penal; esto es que el nombrado, en su calidad de presidente de la firma "BUNGE ARGENTINA S.A." (...) Conforme ello, diremos que **para llegar al estado de duda expuesto,**

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

a los indicios ya apuntados **se suman otras cuestiones referidas por la defensa y que este Tribunal -al igual que lo ha precisado la Excma. Cámara Federal en su resolución de fecha 01/06/2021- entiende que deben ser objeto de investigación para poder determinar la existencia o no del elemento subjetivo requerido por la figura (...)** Consideramos así, que **ello bien podría determinarse a partir de una labor pericial.** (...) Por otra parte, la Cámara también consideró que resultaría de interés examinar si los camioneros contratados por la transportista cuestionada y consignados en las cartas de porte que aportó "Bunge" para probar el traslado del cereal, confirman o niegan haber efectuado dichos traslados y su vinculación con la empresa que presidia el aquí imputado. (...) [E]xpuesta la postura de este Tribunal a través de la presente así como la sostenida oportunamente por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Córdoba y **atendiendo a que el Ministerio Público Fiscal -director de la investigación- no ha llevado a cabo ninguna medida de prueba -ajena a la labor de la AFIP- que permita despejar la duda intelectual,** de conformidad a lo dispuesto por el artículo 309 del CPPN, corresponderá dictar la falta de mérito del encartado Placido Enrique HUMANES ... (Sic, auto del 14.09.2023 dictado por el Juzgado Federal de Villa María, fs. 66 y siguientes; el destacado me pertenece).

Asimismo, en esta oportunidad el señor Juez Federal de Villa María expuso que "... apelados que fueran ambos interlocutorios por parte de la Fiscalía Federal y habiéndose declarado la conexidad de ambas causas (véase fs. 348), la excelentísima Cámara de Apelaciones de Córdoba, mediante auto de fecha 01 de junio de 2021

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

USO OFICIAL

dependencia judicial, ordenando proseguir y profundizar la investigación conforme a los lineamientos trazados por la alzada en el aludido pronunciamiento (véase fojas 399/424) (...) Continuando la Fiscalía con la exposición de fundamentos, se refirió a las pruebas ofrecidas por la defensa. En ese sentido, expresó que el hecho de que no se haya diligenciado la prueba ofrecida por la defensa, no resulta óbice para el dictado del procesamiento solicitado, pues se advierte que esta constituye una maniobra meramente dilatoria, dado que los puntos que pretende acreditar por medio de las medidas ofrecidas, o no han sido cuestionados por esta dependencia, o carecen de utilidad y pertinencia que justifique su diligenciamiento, evidenciando con ello una maniobra meramente dilatoria”.

Rememoró también que: “apelada que fuera la resolución, la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, revocó el interlocutorio de esta Judicatura, disponiendo la ampliación de la investigación. Que, dicha decisión de la Alzada, a criterio de este Tribunal, de alguna manera dejó la causa huérfana de “situación procesal”, no quedando otra interpretación que entender que la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal había sido tan escasa que ni siquiera habilitaba la posibilidad de dictar una falta de mérito” (Sic, fs. 65 de la resolución del Juzgado Federal de Villa María).

Cabe señalar, además, que ya con fecha 19 de diciembre de 2019 y 14 de septiembre de 2020, en oportunidad de resolver la situación procesal del imputado Humanes por primera vez, el Magistrado Instructor advertía

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

que la representación del Ministerio Público Fiscal -directora de la investigación en virtud de la delegación en los términos del artículo 196 del CPPN (delegación efectuada por el propio Juez y refrendada en varias oportunidades durante la presente investigación)-, "puede ampliar la investigación tendiente a verificar y/o descartar los extremos expuestos por la defensa, los cuales colocan a este Tribunal en una situación de duda respecto al conocimiento, por parte del imputado, del carácter apócrifo de las firmas y su intención de defraudar al fisco" (Sic).

Expuesto cuanto precede, debo decir que la claridad y elocuencia de los actos procesales verificados en este proceso, en particular, aquellos observados desde la última intervención de esta Cámara Federal de Apelaciones con fecha 1.06.2021, otorgan razón a las objeciones señaladas por la defensa técnica del imputado.

En este sentido, le asiste razón a la defensa en cuanto sostiene que la cuestión nuevamente en debate ya fue resuelta por esta la Cámara Federal, y sin embargo el Juez de primera instancia ha desoído la resolución dictada por la Alzada.

En esta causa se advierte la grave inobservancia de la intervención de la defensa y con ellos del debido proceso legal, frente a la negativa recurrente de los representantes del Ministerio Público Fiscal de producir la prueba ordenada por este Tribunal. El señor Juez Instructor - pese a las múltiples presentaciones defensivas- mantuvo la delegación de la Instrucción en el Ministerio Público Fiscal y soslayó el deber ineludible que posee de garantizar la vigencia de los derechos de las partes, como único director del proceso, tercero imparcial e independiente del conflicto penal. Lo expuesto, sin

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

mentonar la inobservancia del magistrado de las disposiciones probatorias ordenadas por este Tribunal de Alzada mediante la decisión jurisdiccional firme adoptada el 01.06.2021.

En efecto, es deber inalienable e indelegable del Juez Federal de Instrucción examinar periódicamente las actuaciones para verificar la correcta marcha del proceso y resguardar debidamente los derechos e intereses legítimos de las partes y los demás intervinientes durante la investigación penal, conforme la Constitución y las leyes.

De tal suerte, la prerrogativa facultativa y discrecional del art. 196 del CPPN, no desliga al Juez del deber de controlar y garantizar la efectividad de los derechos de las partes procesales.

Asimismo, cabe expresar que al analizar los alcances del art. 304 del CPPN, con buen criterio en doctrina y jurisprudencia se sostuvo “parece apresurado aseverar que no media arbitrariedad ni afectación del derecho de defensa cuando el instructor no realiza las medidas de prueba solicitadas (CCCFed. Bahía Blanca, Sala II, D.J., 2001-2, pág. 882, f. 15.990); es que cabe analizar si las citas pueden tener éxito y recurrir al arbitrio para cumplir con las prescripciones del ordenamiento (Arzuaga y Coleffi, “Evacuación de cita. Artículo 304 del Código Procesal Penal de la Nación, ¿existe obligación del a quo antes de dictar el procesamiento?”; nota a dicho fallo)” (D’ALBORA, Francisco J. “Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado”, T. II, 7ª ed., Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, año 2005, p. 650).

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

En efecto, el art. 304 del CPPN establece la obligatoriedad del Juez de garantizar la efectiva vigencia del derecho a la prueba del imputado y su defensa. Así, establece que: *"El juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado"*.

Es insoslayable también la necesidad de procurar el avance del proceso en orden a definir con certidumbre la situación procesal del imputado, en línea con el principio de progresividad procesal, pero especialmente en el proceso penal *"tanto por la angustia engendrada al encaminarse el proceso penal respecto de determinada persona como por la eventual restricción de la libertad que comporta [sin mencionar los demás derechos que puedan limitarse o restringirse], es preocupación de todo Código respetuoso de las garantías constitucionales en juego, resolver la situación del imputado con rapidez..."* D'ALBORA, Francisco J. "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado", T. II, 7ª ed., Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, año 2005, p. 659).

Ahora bien, del simple cotejo de los actos procesales, en particular, a partir de la propia resolución apelada dictada por el Juzgado Federal de Villa María, se advierte la reiteración de la posición asumida por el magistrado y el apartamiento de lo decidido por esta Cámara Federal de Apelaciones que dispuso, con fecha 01.06.2021, la adopción de determinadas medidas probatorias, no solo omitidas en su realización, sino que denegadas expresamente por el Ministerio Público Fiscal en un reexamen -contrario al definido por esta Alzada- sobre su utilidad y pertinencia.

En definitiva, la omisión de cumplimiento de la

manda judicial dada en la resolución dictada por esta

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

Cámara Federal de Apelaciones con fecha 01.06.2021, se presenta en detrimento y violación a los principios de progresividad y de preclusión, los cuales reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida, evitándose de ese modo que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero, además, dichos principios procesales obedecen al imperativo de satisfacer el derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca de una vez y para siempre su situación ante la ley penal (Fallos: 272:188; 305:913).

En esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que "... *El principio de progresividad impide que el juicio criminal se retrotraiga a etapas superadas, pues los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas legales. Ambos principios -progresividad y preclusión- reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente* ("Turano, Eduardo A.", 10.12.1998; publicado: JA 1999-II-544; Fallos 321:3396, entre otros).

Debe repararse en que el principio de progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas y su desconocimiento resulta violatorio del principio constitucional del debido proceso legal. Por lo tanto, la nulidad que produce es declarable de oficio en

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

cualquier estado y grado del proceso (art. 172, CPPN), lo cual propicio expresamente en este voto.

En suma, el recorrido procesal observado conduce indefectiblemente a la reiteración de actos procesales, en una suerte de "proceso circular" sin posibilidad de avance ni definiciones concretas para los justiciables, ni certidumbres para la sociedad, en favor del afianzamiento de la Justicia como máxima aspiracional de nuestra Constitución Nacional.

Por otra parte, si bien el deber de objetividad es compartido tanto por los fiscales como por el juez, es este último quien debe garantizar la indemnidad del proceso y que se resuelva en tiempo propio la situación procesal del imputado. Ante la renuencia de la Fiscalía de investigar todos los extremos conducentes a la reconstrucción del dolo, no cabe más que el Juez reasuma la Instrucción.

Ello fue expuesto en la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones del 01.06.2021, en la cual se determinó que debían adoptarse las diligencias probatorias propuestas por la defensa, por cierto, previstas genéricamente en la Instrucción General 1/2017 de AFIP para estos casos, pero inadvertida por los fiscalizadores y demás funcionarios de la Administración.

Por las razones dadas, corresponde declarar la nulidad absoluta de la resolución dictada con fecha 26.10.2023 por el señor Juez Federal de Villa María, por violación al principio de preclusión e inobservancia de la jurisdicción ejercida por esta Alzada con fecha 01.06.2021 en el marco de la competencia legalmente asignada, lo cual deriva en una seria afectación de las garantías procesales acordadas a las partes, en términos de debido proceso





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos de jerarquía constitucional).

Por último, con motivo de la nulidad propiciada y las particulares circunstancias de esta causa, resulta apropiado disponer el apartamiento del Juez Federal de Villa María, debiendo remitirse las actuaciones a la Secretaría de Superintendencia de esta Cámara Federal, a fin de que se designe al Juez que corresponda en lo sucesivo intervenir, e instarlo a que proceda de acuerdo a lo aquí expuesto y, especialmente, lo resuelto por esta Alzada mediante auto de fecha 01.06.2021 (conf. art. 173 del CPPN).

En este sentido, es imperioso disponer en este caso la reasunción de la dirección de la investigación por el Juez, por la sencilla razón de que, a partir de lo resuelto con fecha 01.06.2021 -la admisibilidad de las pruebas ahora denegadas por el Fiscal-, no es posible ordenarle su producción al Ministerio Público Fiscal, en virtud de su autonomía funcional e independencia (conf. art. 120 de la CN y art. 4° de la Ley Orgánica del MPF de la Nación N° 27.148).

En este mismo sentido me expedí en forma inveterada, pudiendo señalar -entre otros- las consideraciones efectuadas en los autos: **"RUDA, David (Tarjeta Naranja) p.s.a. Infracción Ley 24.769" (Expte.:42-2008)** L° 284 F° 175; del 12.05.2008) en el cual se dispuso la nulidad de la resolución por vicios en su fundamentación y se alertó al Juzgado Federal sobre la necesidad de producir la prueba ordenada por esta Cámara Federal, habiendo el Ministerio Público Fiscal postulado la desestimación de la denuncia.

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

Asimismo, más recientemente en los autos: "INCIDENTE DE NULIDAD DE FONT, ALEXIS EN AUTOS: FONT, ALEXIS POR ASOCIACION ILÍCITA FISCAL" (FCB 62000436/2009/8/CA11 y "Incidente de Nulidad de SERI, MIGUEL ÁNGEL en autos 'SERI, MIGUEL ÁNGEL' por Asociación Ilícita Fiscal" (FCB 62000436/2009/7CA11); ambos del 11.03.2016) expresé que: "Se trata, pues, de la prohibición del juez de indicar al Fiscal qué medidas probatorias producir en su investigación, fundada en la autonomía funcional de dicho órgano estatal". En esta misma línea y en cuanto a los deberes jurisdiccionales imposibles de abdicar, sostuve que "no debe perderse de vista que, aun cuando el juez delegue la dirección de la investigación, continúa siendo el director del proceso y custodio de los derechos y garantías de las partes".

En definitiva, encontrándonos frente al límite material de la delegación de la investigación, cual es la existencia de contradicción entre lo dispuesto por este órgano jurisdiccional de segunda instancia y el representante de la Vindicta Pública, no cabe más que disponer que el juez instructor que resulte designado reasuma inmediatamente la investigación y produzca las medidas probatorias ordenadas con fecha 01.06.2021 y luego resuelva la situación procesal del imputado, conforme por derecho corresponda. Sin costas (arts. 530 y 531, CPPN). Así voto.

La señora Juez de Cámara, Dra. Liliana Navarro, dijo:

1) Llegados los autos a estudio de la Suscripta, corresponde expedirme acerca de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y el querellante particular AFIP-DGI en contra de la resolución dictada con fecha 14.9.2023 por el Juzgado Federal de

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

Con respecto a la solución propiciada por el señor Juez del primer voto, debo decir que disiento con la misma. Doy razones:

De manera preliminar cabe apuntar que, respecto de las circunstancias acaecidas en autos y, en particular, el recorrido procesal de la causa, ello ha sido debidamente descripto en el primer voto, razón por la cual se remite a lo allí reseñado en honor a la brevedad.

Dicho ello, cabe traer a colación lo resuelto por esta Alzada con fecha 1.6.2021 en cuanto revocó las resoluciones dictadas con fecha 19.12.2019 y 14.9.2020 por el Juez Federal de Villa María, quien dispuso la falta de mérito del imputado Plácido Enrique Humanes, en orden a la comisión del delito de evasión al impuesto a las salidas no documentadas agravada por el uso de facturas apócrifas.

En aquella oportunidad, se concluyó acerca de la inexistencia de un mérito probatorio suficiente respecto del elemento subjetivo de la conducta ilícita que se le endilga al nombrado que permitiera emitir un auto de mérito conclusivo.

Se valoró que se debía profundizar la investigación, apuntando la conveniencia de producir determinada prueba -que había sido propuesta por la defensa técnica- tendiente a acreditar el conocimiento de la falsedad de los comprobantes apócrifos involucrados en las operaciones cuestionadas.

Se sugirió la realización de una pericia contable para definir la magnitud del impuesto evadido y la reiteración de supuestas operaciones con los proveedores; también se mencionó la conveniencia de requerir informes bancarios y registros de operaciones

USO OFICIAL



sospechosas para examinar la trazabilidad del circuito financiera de pagos; tomar testimonios de las partes intervinientes en las operaciones -en particular, de los transportistas y/o los distintos camioneros existentes conforme las cartas de porte, para determinar el circuito físico del cereal-; como así también recabar prueba documental y testimonial de los empleados de la empresa que dé cuenta de la existencia de mecanismos estandarizados de prevención del fraude fiscal y su cumplimiento, entre otras diligencias.

Como vemos, esta Alzada propuso determinadas medidas de prueba por considerar que a partir de las mismas se iba a poder recopilar amplia información tendiente a reforzar la acreditación de los extremos antes mencionados.

A continuación, con fecha 5.7.2021 las actuaciones fueron recibidas por el Juez Federal de Villa María quien dispuso -entre otras cosas- que la investigación continúe a cargo del Ministerio Público Fiscal.

Con fecha 3.8.2021 la causa fue recibida por la Fiscalía Federal de Villa María, oportunidad en la cual requirió un informe a AFIP-DGI respecto de las empresas -personas físicas y jurídicas - catalogadas como apócrifas, que han operado con la firma "BUNGE ARGENTINA S.A." en el período 2008-2017, indicando la cantidad de cartas de porte involucradas en dichas operaciones.

Párrafo aparte, cabe mencionar que con fecha 13.12.2021 se admitió la constitución de AFIP-DGI en calidad de querellante particular en la presente investigación.

A su turno con fecha 24.11.2022 el Ministerio





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

porte emitidas, autorizadas o confirmadas por "BUNGE ARGENTINA S.A." CUIT 30-70086991-8, en las que figure como transportista la firma "PORTE SRL" CUIT N°30-71162265-5, entre los años 2011 y 2013, especificando aquellos rodados que no sean aptos para el transporte de granos y aquellos que pertenezcan a otros contribuyentes.

Como consecuencia de lo informado, con fecha 22.5.2023 la fiscalía federal interviniente dispuso citar al inspector del Área de Fiscalización de AFIP-DGI Marcos Crema, a prestar declaración testimonial.

Luego de llevar adelante dichas medidas probatorias, con fecha 16.8.2023, la Fiscal Federal de Villa María instó nuevamente el procesamiento sin prisión preventiva de Plácido Enrique Humanes.

Repasadas las circunstancias que anteceden, es dable advertir que el rumbo adoptado por el Ministerio Público Fiscal al profundizar la investigación, no fue el sugerido por esta Alzada con fecha 1.6.2021.

Al respecto, el querellante particular AFIP-DGI, refiere que una pericia contable a fin de determinar más exactamente el total de los montos de las operaciones verificadas por la empresa, no importa al resultado a que se arribe, deviene irrelevante.

Ello es así, en la medida que teniendo en cuenta el objeto procesal perseguido en autos, la maniobra en cuestión se habría consumado sin importar el monto de la misma, esto es, haber operado con firmas manifiestamente apócrifas, evadiendo el pago del tributo por salidas no documentadas.

Agregó que la "prueba de descargo" en referencia a las testimoniales pretendidas para los choferes

USO OFICIAL



transportistas, para determinar el circuito del cereal, o de los empleados de la empresa, carece de sentido atento el extenso tiempo transcurrido (más de diez años), pues no van a lograr conmover el carácter de apócrifas /inexistentes, de los proveedores "Porte" y "Lemos".

También el Fiscal General señala que la Ley 27.430 no supedita ni prevé escalas sobre la condición objetiva de punibilidad, que se encuentren determinadas por la envergadura de la empresa que comete la evasión, afirmando que el tipo penal se configura con independencia del patrimonio o del volumen de actividades que desarrolle la empresa; y termina concluyendo que la pertinencia y utilidad de la prueba en cuestión serán escasas o nulas y solo contribuirán a dilatar la investigación.

Dicho ello, y sin perjuicio de la pertinencia y utilidad de las pruebas oportunamente sugeridas por esta Alzada, en cuanto a su aptitud para contextualizar la conducta ilícita que se le endilga al nombrado, debo decir que un minucioso análisis de las nuevas probanzas recopiladas por el Ministerio Público Fiscal termina de conformar un cuadro probatorio suficiente para dictar un auto de mérito con el grado de probabilidad requerido en esta instancia.

Repárese en este sentido, que el dictado de auto de procesamiento sólo exige elementos de convicción suficientes para estimar posible la existencia del delito y la responsabilidad del imputado -aún a través de indicios apreciables prudencialmente, sin necesidad de contar con la totalidad de los datos necesarios para dilucidar el hecho.

A lo referido anteriormente, encuentro preciso señalar que dicha circunstancia no resulta suficiente para disponer el apartamiento del Juez de instrucción en cuanto

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

no habría velado por el cumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal con fecha 1.6.2021.

Al respecto cabe apuntar que, encontrándose delegada la investigación en la fiscalía federal interviniente y no habiendo esta Alzada dispuesto expresamente que la instrucción la asuma el Juez, la negativa del Ministerio Público Fiscal a practicar dichas medidas encuentra respaldo en lo dispuesto por el art. 212 del CPPN, sin que se verifique lesión alguna en el derecho de defensa de los imputados a partir del proceder de la fiscal federal interviniente quien tiene a su cargo el objeto procesal de la investigación. Tal como señalé en voto solitario en distintas ocasiones en causa "AZAR", sin disponer el apartamiento del Juez.

Dicho extremo cobra particular relevancia si se repara en la inminente entrada en vigencia del sistema acusatorio dentro de nuestra circunscripción con el Código Procesal Penal Federal a partir de lo cual, se produce una redistribución de las funciones de los fiscales y los jueces en el proceso penal federal, quedando íntegramente la investigación en cabeza de aquellos.

2) Corresponde adentrarse en el análisis de la situación procesal del imputado Plácido Enrique Humanes:

Vale la oportunidad aclarar que, en atención a lo dispuesto en la resolución impugnada y los límites del recurso, la discusión se encuentra centrada en la acreditación de la participación culpable del imputado, en función de los requisitos típicos de la figura penal comprometida, esto es, la presunta evasión agravada al impuesto a las salidas no documentadas (Conf. art. 37, Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628).

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

USO OFICIAL

Los hechos por los cuales se dispuso la imputación del encartado han sido descriptos por el Ministerio Público Fiscal de la siguiente manera:

HECHO PRIMERO: "Durante el ejercicio fiscal 2011, Plácido Enrique Humanes, en su carácter de Presidente la firma Bunge Argentina S.A. CUIT 30-70086991-8, habría disimulado la real situación patrimonial de la firma durante el periodo fiscal relativo al año 2011. Para ello, el nombrado habría empleado diversas facturas apócrifas destinadas a simular operaciones comerciales con las firmas Lemos, Lobestein y Asociados S.A. CUIT N° 30-71161088-6 y Porte SRL CUIT N° 30-71162265-5. Asimismo, con la finalidad de otorgarle mayor credibilidad a la maniobra, desde el 10 de febrero al 29 de diciembre de 2011, desde la firma presidida por Humanes se habrían efectuado dieciocho transferencias bancarias a la primer firma y cuarenta y siete transferencias a la segunda, por un monto total de \$ 6.142.702,68. Mediante tales maniobras, Humanes habría provocado un perjuicio fiscal que asciende a la suma de pesos dos millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco con noventa y cuatro centavos (\$ 2.149.945,94) correspondientes a las Salidas no documentadas del periodo fiscal 2011. Lo que fue constatado por personal dependiente de la A.F.I.P. mediante la verificación N° 1.525.329" (del requerimiento de instrucción formulado con fecha 28.5.2019 en autos FCB 8749/2019).

HECHO SEGUNDO: "Durante el ejercicio fiscal 2012, Plácido Enrique Humanes, en su carácter de Presidente la firma Bunge Argentina S.A. CUIT 30-70086991-8, habría disimulado la real situación patrimonial de la firma. Para ello, el nombrado habría empleado diversas

facturas apócrifas destinadas a simular operaciones

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

USO OFICIAL

comerciales con las firmas Lemos, Lobestein y Asociados S.A. CUIT N° 30- 71161088-6 y Porte SRL CUIT N° 30- 71162265-5. Asimismo, con la finalidad de otorgarle mayor credibilidad a la maniobra, desde el año 2011 al 2013, desde la firma presidida por Humanes se habrían efectuado diversas transferencias bancarias a las empresas mencionadas, sumas que eran inmediatamente retiradas de las cuentas bancarias de destino, quedando las mismas prácticamente sin saldo. Mediante tales maniobras, Humanes habría provocado un perjuicio fiscal que asciende a la suma de pesos dos millones novecientos ochenta y un mil quinientos doce con seis centavos (\$ 2.981.512,06) correspondientes a las Salidas no documentadas del periodo fiscal 2012. Lo que fue constatado por personal dependiente de la A.F.I.P. mediante la verificación N° 1.652.990" (hecho nominado primero del requerimiento de instrucción formulado el 10.10.2019 en autos FCB 37670/2019).

HECHO TERCERO: "Durante el ejercicio fiscal 2013, Plácido Enrique Humanes, en su carácter de Presidente la firma Bunge Argentina S.A. CUIT 30-70086991-8, habría disimulado la real situación patrimonial de la firma. Para ello, el nombrado habría empleado diversas facturas apócrifas destinadas a simular operaciones comerciales con las firmas Lemos, Lobestein y Asociados S.A. CUIT N° 30- 71161088-6 y Porte SRL CUIT N° 30- 71162265-5. Asimismo, con la finalidad de otorgarle mayor credibilidad a la maniobra, desde el año 2011 al 2013, desde la firma presidida por Humanes se habrían efectuado diversas transferencias bancarias a las empresas mencionadas, sumas que eran inmediatamente retiradas de

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

las cuentas bancarias de destino, quedando las mismas prácticamente sin saldo. Mediante tales maniobras, Humanes habría provocado un perjuicio fiscal que asciende a la suma de pesos tres millones ciento treinta y siete mil setecientos once con noventa y un centavos (\$ 3.137.711 ,91) correspondientes a las Salidas no documentadas del periodo fiscal 2013. Lo que fue constatado por personal dependiente de la A.F.I.P. mediante la verificación N° 1.652.990" (hecho nominado segundo del requerimiento de instrucción formulado el 10.10.2019 en autos FCB 37670/2019).

Fijado así el hecho, a criterio de la Suscripta corresponde revocar la resolución dictada por el Juez Federal de Villa María en cuanto dispuso la falta de mérito del imputado Plácido Enrique Humanes en orden al delito de "Evasión agravada por el uso de facturas apócrifas -ART. 2 Inc. "D" de la Ley 26.735- Impuesto a las salidas no documentadas."

En este sentido, advierto que existen elementos e indicios que, valorados en forma conjunta, permiten sostener -con el grado de probabilidad requerido para el dictado de un procesamiento- que la conducta del imputado Humanes estuvo precedida por el dolo que requiere el tipo penal, es decir, que en su calidad de presidente de la firma "BUNGE ARGENTINA S.A.", el nombrado habría comercializado con las firmas "Lemos" y "Porte" con conocimiento del carácter apócrifo de las mismas y la intención de defraudar al Fisco Nacional.

Cabe apuntar que la presente investigación se inicia a partir de una denuncia formulada con fecha 28.3.2019 por AFIP-DGI en contra de Plácido Humanes -en su carácter de Presidente del Directorio de la firma Bunge

Argentina S.A. al momento de los hechos- por la presunta

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

evasión agravada del impuesto a las salidas no documentadas en orden al ejercicio fiscal 2011 el cual ascendía al valor de \$2.149.945,94.

Ello con motivo de haberse detectado irregularidades en las operaciones con los supuestos proveedores Lemos, Lobestein y Asociados S.A. y Porte S.R.L., en cuanto habrían carecido de estructura y capacidad operativa para la prestación de los servicios que Bunge declara haber contratado con ellas.

En dicha oportunidad, se consignó que de la documentación que se acompañaba en la denuncia surgía la imposibilidad de Bunge Argentina S.A. de demostrar por otros medios ante el Fisco la veracidad de la facturación, razón por la cual se concluía en la inexistencia de las operaciones por cuenta de las firmas apócrifas, ocultando al verdadero prestador.

Con motivo de ello, -y en paralelo a la denuncia penal- AFIP-DGI procedió a liquidar el impuesto en concepto de "salidas no documentadas" conforme lo prevé el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, es decir, aplicando la tasa de 35% del monto neto de las operaciones en cuestión, y luego puso en marcha el proceso de determinación de oficio de materia imponible (arts. 16 y 17 de la ley 11.683).

Posteriormente, con fecha 30.9.2019 se formuló una segunda denuncia en contra del mismo encartado por idéntico accionar en concepto de salidas no documentadas agravada ejercicio fiscal 2012 por la suma de \$2.981.512,06 y ejercicio fiscal 2013 por la suma de \$3.137.711,91.

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

En ese orden, la hipótesis del Ministerio Público Fiscal introducida en la promoción de la acción penal se centra en que a partir del análisis oportunamente llevado a cabo por AFIP-DGI, surgiría que Bunge Argentina S.A. habría efectuado transferencias bancarias a las firmas Lemos, Lobestein y Asociados S.A. y Porte S.R.L., erogaciones que carecen de documentación ya que, al haberse usado facturas apócrifas, los verdaderos destinatarios no se encuentran identificados, lo que implicó un perjuicio fiscal en los montos referidos precedentemente, correspondiente al Impuesto a las salidas no documentadas de los períodos fiscales en cuestión.

Las facturas son cuestionadas no por considerarlas materialmente falsas o por la inexistencia de la operación comercial que pretendían respaldar, sino por la circunstancia de que no reflejaban la realidad al mantener oculta la empresa que verdaderamente llevó a cabo la operación y que se benefició con la evasión de las obligaciones tributarias.

Respecto de esta figura, cabe señalar que la Ley de Impuestos a las Ganancias (ley 20.628) en sus arts. 37 y 38 contempla el impuesto a las salidas no documentadas, norma que se complementa con el artículo 55 del decreto reglamentario de dicha ley y por la resolución general 893/2000 dictada por AFIP.

El art. 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias expresamente prevé que "...cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas...", no se admitirá su deducción en el balance impositivo y la erogación estará sujeta al pago de una tasa del 35% de la misma.

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

A mayor abundamiento, el art. 55 de la reglamentación prevé que no serán computables en el balance impositivo las erogaciones del contribuyente *"...cuando carezca de los respectivos comprobantes o se presuma que no han tenido por finalidad obtener, mantener y conservar ganancias gravadas..."*.

En relación con su naturaleza jurídica, la CSJN tiene dicho que, ante la falta de individualización de los beneficiarios del rédito, quien realiza la erogación debe abonar el tributo a título propio, es decir, como obligado principal (CSJN, Geigy Argentina SA, 15.10.1969).

Permite gravar al erogante lo que presumiblemente es renta del beneficiario y a quien, por la ausencia o ineficacia de la documentación respaldatoria, no puede localizarse para efectivizar la responsabilidad fiscal (TFN, sala B, *"Interbaires SA"*, rto. 31/10/2002).

Ahora bien, si bien es cierto que en este tipo de delitos la acreditación del aspecto subjetivo del tipo en forma directa no resulta tarea fácil, ello no implica que pueda inferirse a partir de datos objetivos y concretos incorporados a la causa.

En este sentido, estimo propicio traer a colación diversos extremos que considero fundamentales a la hora de valorar el hecho bajo análisis, en cuanto demuestran que la imputación delictiva no resulta antojadiza si reparamos en el contexto delictivo en que la misma se sitúa.

De la prueba aportada por AFIP surge que, al momento de los hechos investigados, el encartado Humanes revestía el carácter de Presidente del Directorio de la

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

firma Bunge Argentina S.A., es decir, ostentaba suficiente responsabilidad jerárquica dentro de la firma que permite conjeturar su conocimiento respecto en la modalidad en que contrataba Bunge S.A. con terceros.

En otras palabras, estaba dentro de su ámbito de reserva haberse representado la seria posibilidad de que las operaciones observadas objeto de la presente instrucción, transgredían la normativa penal tributaria.

Seguidamente, cabe realizar algunas consideraciones respecto de la circunstancia de que a la fecha de las operaciones cuestionadas, las firmas Porte SRL y Lemos, Lobestein y Asociados S.A. no estaban incluidas en la base APOC y se encontraban inscriptas en el Registro Fiscal de Operaciones de Granos habilitados.

A partir de la prueba recabada en autos, y en concreto de la documentación acompañada por AFIP-DGI al formular las respectivas denuncias, se pudieron determinar distintas circunstancias que resultan reveladoras respecto del carácter apócrifo de las firmas referenciadas.

Valga la aclaración de que dicha documental, a la cual el Ministerio Público Fiscal y el querellante particular hacen referencia y describen minuciosamente en sus informes del art. 454 del CPPN, ya fue profusamente examinada por la Suscripta en la anterior radicación de la causa ante esta Alzada.

Al respecto, no puede soslayarse que la información objetiva que surge de dicha prueba no se encuentra controvertida, viéndose objetada la interpretación y los alcances que debe asignársele a la misma a los fines de evaluar el aspecto subjetivo de la conducta endilgada al encartado Humanes.

Dicho ello, en primer término cabe señalar que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

domicilio fiscal de la empresa era un inmueble familiar que no poseía cartelera que la identifique.

Con motivo de dicha constatación se pudo determinar también que dicho inmueble estaba habitado por una persona llamada Marcelo Artaza cuya función se limitaba a recibir documentación de la firma para luego entregársela al señor Paulo Angaramo.

En dicha oportunidad, Artaza habría expresado que desconocía si la empresa poseía camiones ya que en su domicilio nunca había visto (Informe final de inspección ordinaria, O.I. N° 1652990 de Bunge Argentina S.A.).

También se pudo corroborar que Porte S.R.L no ha poseído automóviles ni camiones aptos para el transporte de granos ni ningún otro tipo de bien mueble registrable, como así tampoco es propietaria de ningún bien inmueble.

Asimismo, estimo pertinente traer a colación el resultado de uno de los elementos de prueba colectados con posterioridad a lo resuelto por esta Alzada con fecha 1.6.2021; se trata del informe remitido por AFIP-DGI incorporado al Sistema LEX100 bajo la denominación "DEO: 9016110 - OFICIO COMUNICACIÓN - 600000000992 - AFIP - DGI-DIRECCIÓN REGIONAL RIO CUARTO" en cuanto allí se procede a efectuar un análisis de las patentes informadas en las cartas de porte, pudiendo determinar que se habrían utilizado un total de 53 vehículos distintos para llevar a cabo el transporte del cereal en cuestión, no figurando ninguno como propiedad de la firma "Porte SRL" y resultando 18 de ellos no aptos para el transporte de cereales.

Circularizados los clientes y proveedores de Porte S.R.L para corroborar la veracidad de las

USO OFICIAL



operaciones, se pudo constatar que ninguno de los vehículos utilizados para realizar los transportes estaba a nombre de la firma y los que usa se encuentran registrados a nombre de personas físicas o jurídicas que no se corresponden con la empresa en cuestión.

Todo ello refleja la nula capacidad patrimonial y operativa de la firma para realizar los transportes que declara realizar.

A su turno, Porte S.R.L. sólo habría presentado declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2019 (con ventas y compras cero), no habiendo hecho lo propio para los períodos fiscales en que Bunge Argentina S.R.L. declara haber tenido operaciones con ella (2011 a 2013).

Respecto de la firma Lemos, Lobestein y Asociados S.A. se pudo constatar que ha realizado pagos de impuestos que no guardarían relación con las operaciones supuestamente efectuadas; declara sólo tres empleados; no posee bienes registrables a su nombre y posee activos de escasa relevancia, entre otras tantas inconsistencias.

Del punto 1 del informe final de inspección ordinaria O.I. N° 1652990 de Bunge Argentina S.A. se desprende que la planta de acopio y consignación de esta firma, no operaba como tal en realidad, no había rastro de tránsito de camiones y mucho menos, indicios de alguna actividad dentro de la planta.

Dichos extremos, abonan por de más la hipótesis de que las firmas de mención eran apócrifas y tornan inverosímiles las operaciones reseñadas al significar ellos un obstáculo insalvable para su celebración, razón por la cual considero que su inclusión o no en la base APOC, no resulta determinante.

En tal sentido, tuve oportunidad de expedirme

con fecha 14.8.2017 en el marco de los autos **"MOLYAGRO**
Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

USO OFICIAL

S.A. SOBRE INFRACCION LEY 24.769" (Expte. FCB 62000598/2010/CA1), en cuanto señalé "...respecto del carácter apócrifo de un determinado proveedor que tal calidad no deriva del simple incumplimiento de deberes formales por parte de estos sujetos ni de su efectiva inclusión o no, en la Base Apoc del Fisco. Por el contrario, procede de la constatación de ciertas circunstancias fácticas que conducen, inexorablemente, a concluir su existencia como persona física o jurídica en el plano formal y no real. En efecto, la falsedad de los proveedores, por lo general, es inferida por el Fisco en virtud de los procedimientos de verificación que éste realiza, no solo mediante el control de la información que surge y éste recoge de la base informática que el Organismo Fiscal posee, sino además, de las inspecciones que realiza in situ, en los distintos domicilios que los contribuyentes informan ante el Fisco."

Por otro lado, en orden a la circunstancia de que efectivamente se hayan materializado los pagos mediante depósitos en las cuentas de las firmas mencionadas, entiendo que ello carece de aptitud desincriminante ya que, tal como fuera acreditado por la instrucción, dichos fondos eran inmediatamente retirados en efectivo (informe complementario de Fiscalización de Bunge Arg. S.A. OI 1.652.990).

En relación con el argumento vertido por la defensa respecto de la envergadura de las operaciones involucradas en cuanto señala que las mismas resultarían efímeras en relación al nivel de facturación de Bunge, considero que ello es un argumento irrelevante desde el momento en que el perjuicio fiscal ocasionado superó la

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

condición objetiva de punibilidad prevista en la norma lesionada, extremo que es suficiente para descartar cualquier pretensión de tachar como insignificantes a las conductas investigadas.

Esto último se presenta como un elemento más que da cuenta de la modalidad operativa detallada ya que las cuentas bancarias no habrían sido utilizadas como las de cualquier empresa operativa sino que habrían constituido un medio para dotar de cierta apariencia de legitimidad a las operaciones que encubrían.

Considero que los extremos mencionados precedentemente constituyen indicios contundentes que abonan la hipótesis de que estamos frente a meras estructuras vacías constituidas con el único fin de eludir el cumplimiento de obligaciones tributarias tanto propias como de terceros, es decir, con el solo fin de inducir a error al Estado y librar de la carga impositiva a los que operan con estas, circunstancia que habría conocido el encartado al ser el principal responsable de la firma Bunge Argentina S.A.

Aquí entonces, comparto con los fundamentos dados por el Sr. Fiscal de Cámara en cuanto a que la serie de indicios colectados en autos permiten inferir el dolo; en tanto no es esperable de quien reviste el cargo de Presidente de una firma de la envergadura de Bunge Argentina SA, que realizan operaciones comerciales de mucha entidad, que impliquen sumas importantes de dinero, que trabajen y se confíen con firmas como "Porte" y "Lemos" que no poseían trayectoria en el mercado, inmuebles propios, cartelería o publicidad.

Tampoco obran incorporados a la causa constancias que den cuenta de mínimos recaudos para





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

circunstancia que no tendría por objeto acreditar la prueba solicitada por la defensa.

Repárese en este sentido, que si el imputado en su calidad de Presidente de la firma Bunge Argentina S.A. hubiera adoptado ciertas precauciones e impartido directivas tendientes a resguardar la incolumidad de la hacienda pública, difícilmente esta empresa haya podido contratar con firmas de las características de Porte S.R.L. Lemos, Lobenstein y Asociados S.A.

Así las cosas, resulta evidente el desinterés del imputado por la afectación al bien jurídico, lo cual permite inferir que el nombrado se habría conformado con la producción de la situación típica.

El querellante particular AFIP-DGI informa ante esta Alzada en igual sentido, refiriendo que el precedente "MOLYAGRO" (antes citado) tiene íntegra adecuación al caso de marras, teniendo en cuenta la dinámica y características propias de los negocios celebrados por Bunge Argentina SA con estos proveedores apócrifos, afirmando que dicha empresa en calidad de comprador, no habría ignorado la verdadera identidad de la persona del vendedor, ni otras cuestiones relevantes atinentes a la solvencia y reputación de quienes contratan, a los fines de evaluar la rentabilidad y factibilidad de los negocios en cuestión.

Lo mencionado precedentemente, encuentra refuerzo en lo expresado en ocasión de prestar declaración testimonial con fecha 30.5.2023 el inspector contador Marcos Crema, agente de esta AFIP-DGI, en cuanto señaló que en el caso de "Porte", Afip había recibido una denuncia, donde declaraban que Porte era una empresa

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

apócrifa, que intervenía en el mercado del transporte de cereal y que la misma era utilizada por grandes empresas, entre ellas Bunge, para entre otras cosas, imponer condiciones en dicho mercado, en el precio y en las condiciones en las que se realizan los fletes. Al ser empresas que no pagan impuestos, pueden ofrecer los transportes a un menor precio, condicionando al resto de los transportistas; en el caso de Lemos, recuerdo que declaraban tener una planta de acopio, que funcionarios constatan, que nunca estuvo en funcionamiento y también pudo corroborarse que todo el cereal, que supuestamente pasaba por ese proveedor, era a través de proveedores que también estaban en la base APOC de AFIP, o que tenían inconsistencias en la cadena de comercialización.

En relación a ambos casos, se determinó la existencia de una simulación relativa, lo que significa que lo que se cuestiona en realidad no es la existencia o no de la operación. Sino, en cabeza de quien fue realizada, entendiéndose que estos proveedores, Porte y Lemos, no fueron en realidad, los verdaderos prestadores de los servicios. La operación existió, pero utilizan estos dos proveedores como pantalla para ocultar los verdaderos proveedores.

Al ser simulaciones relativas, entendemos que no existe un retorno a la firma, sino que la salida de dinero, va al verdadero prestador de los servicios y si existiera dicho retorno, no se registraría contablemente, por lo que resultaría prácticamente imposible constatarlo por medio de una pericia, teniendo en cuenta el tiempo que pasó y el monto de las operaciones que realiza la firma."

Así las cosas, encuentro inverosímil suponer que un tercero contrate con una firma de estas cualidades y

desconozca extremos como los referidos anteriormente, toda

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

vez que se encuentran en juego operaciones comerciales de entidad que involucran sumas importantes de dinero y mucho más importante aún, podrían poner en riesgo su reputación comercial.

En otras palabras, Bunge Argentina S.A. nunca pudo operar materialmente con las firmas mencionadas, aunque formalmente se hayan confeccionado documentos necesarios para aparentar tal situación.

En lo que hace a la prueba indiciaria, se tiene dicho que se recomienda valorar la misma “...en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta” (CAFFERATA NORES, José I.- HAIRABEDIÁN, Maximiliano. *La Prueba en el Proceso Penal. Segunda edición. Ed, Abeledo Perrot. Buenos aires, 2011, p. 251*).

Adviértase, en este sentido, que lo que permitiría percibir de manera completa la naturaleza del vínculo entre Bunge Argentina S.A. y las firmas mencionadas y el conocimiento de Humanes al respecto, es un análisis global de los indicios apuntados, es decir, del panorama completo.

Estimo propicio traer a colación lo expuesto por la Dra. Angela Ledesma respecto del valor de la prueba indiciaria en la instrucción, en cuanto sugiere que dicha etapa del proceso penal y las decisiones que se adoptan en la misma: “...es terreno fértil para el funcionamiento de los indicios, sobre todo teniendo en cuenta el carácter preparatorio de la investigación penal, donde las decisiones no causan estado, son mutables, revisables y algunas revocables de oficio, pero además el principio in

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

dubio pro reo no funciona en esta etapa procesal, por lo menos en toda su dimensión, lo cual no es un dato menor, porque precisamente la duda funciona a favor de la investigación..." (LEDESMA, Ángela. El debido proceso penal. Ed, Hammurabi. Buenos aires, 2017, p. 177).

En definitiva, advierto que en virtud de la responsabilidad funcional, corporativa y encontrándose a cargo de la conducción de la Firma Bunge Argentina S.A., teniendo un total y pleno conocimiento de los asuntos contables y financieros de la misma, el encartado Humanes habría conocido el manifiesto carácter apócrifo de las firmas Lemos, Lobestein y Asociados S.A. y Porte SRL (solvencia, operatividad, reputación) y que las mismas constituían meras pantallas que acumulaban deudas fiscales sin contar con respaldo patrimonial para responder por ellas.

Circunstancia que, en definitiva, permitió a Bunge aparentar operaciones ocultando al verdadero prestador, disminuyendo costos y aumentando ilícitamente las ganancias, lo que a su vez también genera una competencia desleal en el mercado.

En esta línea, me expedí con fecha 8.5.2017 en el marco de los autos **"EUSKA S.A. SOBRE INFRACCION LEY 24.769"** (Expte. FCB/25380/2013/CA1) 08/05/2017, en cuanto señalé que: *"...teniendo en cuenta la dinámica y características propias de los negocios celebrados por la empresa Euska S.A. con estos proveedores apócrifos, es que cabe afirmar que el comprador no pudo haber ignorado, no sólo la identidad de la persona del vendedor y su domicilio, sino también otras cuestiones relevantes su solvencia, su reputación, la calidad de los productos que ofrece e incluso la distancia en las que se encuentran los depósitos de los granos a los fines de evaluar la*

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

rentabilidad y factibilidad del negocio en cuestión (...) la naturaleza de los negocios celebrados obliga a las partes a poseer determinada estructura y capacidad económica; y que la relevancia en la magnitud de los importes de dinero en las transacciones efectuadas exige conocer, al menos, la identidad de las personas contratantes; que la documentación presentada por la contribuyente -que avala dichas operaciones- exhibe un sinnúmero de irregularidades e inconsistencias sustanciales."

Por todo lo expuesto, es que advierto que existen elementos e indicios que, valorados en forma conjunta, permiten sostener -con el grado de probabilidad requerido en esta instancia- la participación culpable del imputado en orden a la presunta evasión agravada al impuesto a las salidas no documentadas (Conf. art. 37, Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628) investigada en autos.

En consecuencia, corresponde revocar la falta de mérito dictada por el Juez Federal de Villa María, y en consecuencia, ordenar el procesamiento del imputado Plácido Enrique Humanes como presunto autor responsable del delito de "Evasión agravada por el uso de facturas apócrifas -ART. 2 Inc. "D" de la Ley 26.735- Impuesto a las salidas no documentadas", debiendo el Juez de instrucción pronunciarse sobre la prisión preventiva y embargo, a los fines de garantizar la doble instancia (art. 310, 312 y 518 del CPPN).

Por último, a los fines de evitar la consumación de la prescripción de la acción penal y una vulneración al debido proceso con motivo del tiempo transcurrido entre los distintos vaivenes procesales que ha transitado la

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

presente causa, el Juez Federal de Villa María deberá instrumentar los medios necesarios para culminar el trámite de la presente instrucción y proceder a su elevación de juicio con la mayor celeridad posible. Así voto.

El señor Juez de Cámara doctor Abel G. Sánchez Torres dijo:

Puestos nuevamente estos autos a despacho del suscripto con motivo de la recirculación del expediente, habiéndose pronunciado la señora Jueza de Cámara doctora Liliana Navarro, debo efectuar las siguientes consideraciones:

I.- De la lectura del voto de la colega se colige una ostensible diferencia con la interpretación del fallo dictado por este Tribunal de Alzada con fecha 1 de junio de 2021, en cuanto califica la disposición de medidas probatorias como una simple sugerencia de un curso de investigación.

Por el contrario, en dicho precedente en estos mismos autos, la Sala expresó con claridad que debían adoptarse las diligencias probatorias solicitadas por la defensa técnica del imputado Humanes.

En efecto, al resolver en el marco del: "Incidente de nulidad en autos: HUMANES, Plácido Enrique por evasión agravada tributaria" (FCB 8749/2019/1/CA2), con motivo de la interpretación equivocada y sesgada que realizara el Ministerio Público Fiscal sobre sus términos, con los cuales pretendió justificar la disposición de medidas probatorias por fuera del objeto procesal previamente definido en la causa, expresé: **"IV.- La revocación del auto de falta de mérito por esta Cámara Federal y su motivación:** En primer lugar, advirtiendo la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

Federal, estimo conveniente precisar los términos de la resolución dictada con fecha 1 de junio de 2021 por esta Sala, en virtud del recurso de apelación deducido en su oportunidad por los representantes del Ministerio Público Fiscal en contra de la falta de mérito dispuesta en favor del imputado Plácido Enrique Humanes, sindicado de la presunta comisión de evasión al impuesto a las salidas no documentadas agravada por el uso de facturas apócrifas por los periodos fiscales 2011, 2012 y 2013, en su carácter de Presidente de la sociedad Bunge Argentina S.A. (art. 2, inc. d, en función del art. 13, del Régimen Penal Tributario, conf. Ley 27.430).

En aquella ocasión, el Juez de primera instancia sostuvo que no se encontraba suficientemente probado, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, que la conducta del imputado haya estado precedida del dolo requerido por el tipo de injusto. Específicamente, que Plácido Enrique Humanes, en su calidad de presidente de "Bunge Argentina S.A.", haya comercializado con las firmas "Lemos, Lobestein y Asociados S.A." y "Porte SRL" con conocimiento del carácter apócrifo de dichas compañías y con la intención de defraudar al Fisco nacional.

En su contra, el Ministerio Público Fiscal interpuso formal recurso de apelación, lo cual habilitó la competencia de esta Alzada. Entre sus agravios señaló que en las resoluciones no se había realizado un análisis integral del material probatorio colectado.

Ahora bien, en aquel momento, como Juez de primer voto, señalé que debía determinarse si del plexo probatorio incorporado hasta el momento se podía seguir - vía inducción inferencial y en grado de probabilidad- la

USO OFICIAL



acreditación del aspecto subjetivo del tipo penal, en particular, el conocimiento del autor del carácter apócrifo de los comprobantes emitidos por los proveedores impugnados, que habrían sido recibidos e integrados a la contabilidad y liquidación impositiva de la empresa Bunge S.A.

En efecto, se atribuye al imputado Plácido Enrique Humanes, en su carácter de presidente del directorio de Bunge S.A., haber celebrado operaciones en el mercado de granos con proveedores apócrifos (un comisionista y un transportista), toda vez que aquellos sujetos presuntamente no poseían capacidad económica, financiera y/u operativa para realizar dichas operaciones, lo que habría implicado un ocultamiento del verdadero prestador del servicio. En este sentido, se cuestiona que los beneficiarios finales de las erogaciones hayan sido los proveedores declarados, pero no se desconoce la existencia de las operaciones y la necesidad y deducción del gasto efectuado por la empresa Bunge S.A.

En este orden, a raíz de los agravios expuestos por el Ministerio Público Fiscal y su contestación por la defensa técnica del imputado, expuse el marco jurídico aplicable al caso, que integra conceptos tales como: el dolo de la evasión, en general, la evasión al impuesto a las salidas no documentadas, en particular, y finalmente la prueba del dolo en el delito de evasión, en general, y la prueba del dolo en las evasiones fiscales por operaciones en el mercado de granos, en particular; consideraciones a las que me remito en homenaje a la brevedad.

También mencioné que, recientemente, mediante la Instrucción Interna 1/2017, la AFIP definió pautas de trabajo para aquellos casos en los que se haya detectado

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

la utilización de facturas apócrifas, fundadas en la experiencia recogida principalmente de la jurisprudencia, tendientes a que sus agentes se enfoquen en la detección de aquellas infracciones donde el error tenga reducidas posibilidades de ser alegado exitosamente por el contribuyente.

Sin perjuicio del alcance limitado de la instrucción de mención y su eficacia e importancia interna dentro de los procedimientos de AFIP-DGI, resulta ilustrativa de las circunstancias asumidas por el propio organismo recaudador como significativas para calificar, inicialmente y previo a formular denuncia penal, el conocimiento efectivo del contribuyente de la falsedad del comprobante o factura empleada para acreditar la operación económica.

En esta lógica, expuse que, en el caso de autos, los montos de las operaciones cuestionadas con relación a los montos totales de operaciones similares verificadas por la empresa aparecerían como ínfimos, ya que según denuncia la defensa (fs. 81) representarían tan solo el 0,23% sobre la facturación total de la empresa, extremo de interés que no había sido corroborado por la Instrucción, debiendo producirse la prueba pericial solicitada por la defensa.

Además, indiqué como relevante la indagación sobre circunstancias tales como la cantidad de operaciones de la compañía en dichos períodos con comprobantes apócrifos versus los genuinos, el rédito, ganancia o beneficio que traería aparejada la presunta maniobra ilícita para determinar el móvil delictivo, la existencia o no de controles internos y protocolos de prevención del

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

fraude fiscal que hubieran permitido documentar los distintos segmentos de contratación y supervisión (según la defensa, poseían protocolos estandarizados de actuación, pues le serían exigidos por la empresa controlante), la existencia de habilitación de los distintos organismos estatales encargados de la fiscalización de la comercialización y tributación, entre otros.

En este sentido, sostuve que resultaría de interés examinar si los camioneros contratados por la transportista cuestionada y consignados en las cartas de porte que aportó Bunge S.A. para probar el traslado del cereal, confirman o niegan haber efectuado dichos traslados y su vinculación con la empresa que presidía el aquí imputado.

Asimismo, dije que no resultaba menor la circunstancia de que los proveedores impugnados, al momento de operar con Bunge S.A., se encontraban debidamente autorizados por la autoridad de control (AFIP-DGI) estando inscriptos en el Registro Fiscal de Operadores de Granos y, por contrapartida, no encontrarse informados en la Base eApoc, ya que, sin perjuicio de su carácter meramente informativo, su consulta resultaría demostrativa de la mínima diligencia de un "buen hombre de negocios", así como que los pagos se habrían realizado por vía bancaria.

En definitiva, para decidir sobre la acreditación del dolo del autor en esta etapa procesal, debía indagarse si durante la investigación se había reunido o no evidencia, de cargo o descargo, respecto del conocimiento de Humanes sobre la apocrificidad de los contribuyentes observados, principalmente prueba

indiciaria que es la prevalente en este tipo de

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

operaciones y supuestos delictivos; para concluir en sentido negativo, es decir, en la escasa actividad probatoria observada en la Instrucción que devino en la necesaria revocación del auto de falta de mérito impugnado...

Por todo lo expuesto, advertí la necesidad de producir la prueba sugerida por la defensa, en resguardo del imperativo de objetividad y lealtad procesal, que permita dilucidar los hechos del proceso, en particular, la existencia o no del ánimo doloso del imputado en las conductas enrostradas.

De tal suerte, estimé conveniente que la Instrucción solicite ad effectum videndi et probandi el expediente administrativo que se sustancia con motivo de las operaciones cuestionadas, y proceda a analizar las constancias allí incorporadas para determinar si la actuación de Bunge SA fue ajustada a derecho, o bien, si fue negligente o dolosa, para así determinar en definitiva la situación procesal del imputado en esta causa penal.

No obstante, consideré que la hipótesis delictiva sostenida en su crítica por el Ministerio Público Fiscal, en orden a la existencia de connivencia con los proveedores de servicios presuntamente apócrifos toda vez que Bunge recibiría retornos dinerarios a partir de las operaciones cuestionadas, merece ser investigada para determinar su efectiva existencia e individualizar a quienes hubieran intervenido.

En suma, ponderando el material convictivo incorporado a los fines de sopesar el compromiso procesal del encausado en orden a la imputación que pesa en su contra, a la luz de las reglas de la sana crítica

USO OFICIAL



racional, vislumbré la escasez de actividad investigativa que permita reconstruir los extremos jurídico-penales relevantes de los hechos, resultando prematuro -en el caso de autos- el dictado de resolución de mérito.

En otras palabras, ante aquel auto de mérito dictado con base exclusiva en los elementos de convicción incorporados por la AFIP-DGI, sin que se haya producido prueba dirimente en sede judicial que corrobore sus conclusiones acerca de las conductas endilgadas, en particular sobre el aspecto subjetivo de los delitos enrostrados, resultaba prudente en aquella ocasión disponer su revocación, debiendo intensificarse la investigación. Así voté y así salió aquella resolución" (del voto del suscripto en "Incidente de nulidad en autos: HUMANES, Plácido Enrique por evasión agravada tributaria" (FCB 8749/2019/1/CA2), que lideró la mayoría).

II.- Ahora bien, sin intención de reiterar aquí los conceptos expuestos en las distintas oportunidades en las que me pronuncié en esta causa, tal como resalté en el voto que lidera esta encuesta, es imperativo legal y constitucional garantizar el debido proceso y el efectivo ejercicio del derecho de defensa, dentro de los cuales se encuentran ínsitos el derecho a la prueba, el equilibrio o paridad de armas entre las partes y el avance progresivo del proceso que permita definir, con certidumbre y en tiempo propio, tanto la situación procesal del imputado como también las legítimas expectativas de las demás partes y la sociedad en general.

Cabe reiterar una cuestión de trascendental importancia: existe una amplísima coincidencia de criterio entre lo postulado por esta Cámara Federal en el pronunciamiento de fecha 1.06.2021 y el asumido por el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

cuales resolvió en favor de la falta de mérito del imputado. La (exclusiva) discrepancia resulta de la consideración del Juez de grado de la imposibilidad o inconveniencia de la jurisdicción de adoptar medidas de investigación en la inteligencia que realiza del contenido y alcances de las funciones del órgano requirente y del jurisdiccional, conforme al principio acusatorio de separación de funciones.

Al respecto, entiendo que, en su análisis, el Juez omitió considerar la integralidad de los principios que informan a los sistemas acusatorios en general, pero específicamente al adoptado por el CPPF -Ley 27.063- **de corte netamente adversarial**, junto con las reglas jurídicas incorporadas que garantizan la **"paridad de armas"** y la **defensa activa** que incluye la posibilidad de llevar adelante su propia investigación, con auxilio -en su caso- del Poder Judicial, de conformidad a la teoría del caso escogida. Ello, sin perjuicio de la carga probatoria de la acusación (o desvinculación) del proceso en cabeza del Ministerio Público Fiscal.

Esta posición relativa a la aparente imposibilidad de intervención de la judicatura en favor del derecho a la prueba de la defensa, a mi criterio equivocada, fue adoptada en el voto precedente de la señora Jueza Dra. Liliana Navarro, en el entendimiento de que: *"encontrándose delegada la investigación en la fiscalía federal ... la negativa del Ministerio Público Fiscal a practicar dichas medidas encuentra respaldo en lo dispuesto por el art. 212 del CPPN, sin que se verifique lesión alguna en el derecho de defensa de los imputado a partir del proceder de la fiscal federal interviniente"*



quien tiene a su cargo el objeto procesal de la investigación. (...) Dicho extremo cobra particular relevancia si se repara en la inminente entrada en vigencia del sistema acusatorio dentro de nuestra circunscripción con el Código Procesal Penal Federal a partir de lo cual, se produce una redistribución de las funciones de los fiscales y los jueces en el proceso penal federal, quedando íntegramente la investigación en cabeza de aquellos" (Sic).

Por el contrario, el propio Código Procesal Penal Federal -Ley 27.063, implementado de forma parcial en esta circunscripción- expresamente prevé: "**Principios del proceso acusatorio. Art. 2** Durante todo el proceso se deben observar los principios de igualdad entre las partes ...". Sobre este principio acusatorio, se ha dicho -con acierto- que: "El principio de igualdad entre las partes, según lo denomina la norma, procura que el poder de la organización estatal, al servicio de la persecución penal, no resienta el derecho del imputado a resistir la imputación con posibilidades parejas a la del acusador, **otorgándole facultades equivalentes a la de los órganos de persecución del Estado.** El respeto de este principio [también denominado "de igualdad de armas" por alguna doctrina, por toda véase Roxin, Derecho ..., p. 80] **exige que tanto la parte acusadora como la defensa cuenten con las mismas atribuciones para preparar y argumentar sobre el caso, esto es con idénticas posibilidades para influir sobre la recepción y valoración de la prueba y en el resultado de la sentencia** [Maier, Derecho..., t. I, ps. 585 a 588]" (DARAY, Roberto R. (2022). Código Procesal Penal Federal 3 ts. (3ª Edición). Hammurabi, pág. 40).

Por su parte, en cuanto a las reglas sobre la prueba, el art. 135 del CPPF dispone que: "la recolección

Fecha de firma: 24/07/2024,
Alta en sistema: 25/07/2024
Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA
Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

USO OFICIAL

y admisibilidad de la prueba se ajustará a las siguientes reglas procesales: a) la recolección de los elementos de prueba estará a cargo del representante del Ministerio Público Fiscal, quien actuará bajo los principios de objetividad y lealtad procesal y deberá requerir orden judicial previa sólo en los casos en que este Código así lo establece; b) **las demás partes podrán recolectar por sí las pruebas que consideren necesarias y sólo recurrirán al representante del Ministerio Público Fiscal si fuese necesaria su intervención. En caso de negativa injustificada podrán recurrir al órgano jurisdiccional competente para que así lo ordene.** La prueba producida por la querella se incorporará como anexo al legajo del Ministerio Público Fiscal cuando esta lo solicite; la defensa tendrá su propio legajo de prueba" (Sic, el destacado me pertenece).

En este sentido, el autor de cita con quien acuerdo en criterio, expresa que: "al igual que el fiscal, las partes podrán recolectar y hacer valer las pruebas que sean "su interés". Se hallan condicionadas a la intervención del fiscal para el caso que no puedan hacerlo por sí mismas, según marca el precepto y podrán recurrir al órgano jurisdiccional frente a su negativa a producirlas (...) En el particular caso del **art. 279**, el texto hace referencia al "**auxilio judicial**" para el supuesto de que las partes, en su intento de producir prueba, encuentren obstáculo para verificarla, con lo cual esa producción, en tal caso, correrá por cuenta del **juez con funciones de garantía**" (DARAY, Roberto R., ob. cit., pág. 798; el destacado me pertenece).

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

Se advierte en el texto del nuevo Código Procesal Penal Federal la positivización de aquella solución que por vía de interpretación el suscripto sentó en numerosos fallos, al decir que: "no escapa al suscripto el conocimiento de que el ordenamiento legal no prevé de forma expresa la posibilidad de recurrir las decisiones del Fiscal mediante la interposición de recursos de reposición y apelación, toda vez que tales vías de impugnación han sido previstas para atacar exclusivamente resoluciones judiciales (al respecto ver: Pirozzo, Jorge Daniel y Solimine, Marcelo A., La necesidad de mecanismos de control sobre las decisiones del fiscal. Inexplicable falta de previsión en el Código Procesal Penal de la Nación, RDP, 2005-6, pág. 3 y ss). **Pero ello no impide que mediante la adecuada interpretación de todo el sistema normativo se admita que la parte afectada por la decisión del fiscal pueda cuestionarla**". En definitiva, expresé que: "... en consonancia con la conclusión propuesta por los referidos autores, entiendo que **a los fines resguardar los derechos y garantías del imputado, debe admitirse el control de ciertas decisiones del Fiscal (como la aquí cuestionada), mediante la presentación directa ante el juez, que actuará como juez de garantías del proceso.** Contra lo resuelto por el juez de primera instancia quedaría habilitada la instancia recursiva prevista en el ordenamiento, esto es, el recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones competente" (conf. voto del suscripto en autos: "Recurso de Queja interpuesto por Oreste Valentín Padován en autos caratulados: "Bruno Laborda Guillermo Enrique..." (Expte. 14.573, resolución del 4.08.2006 y más recientemente en "RECURSO DE QUEJA EN AUTOS 'ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS -





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

44868/2017/2/RH1), dictada con fecha 23 de septiembre de 2019).

Asimismo, en punto a la prueba del dolo se señaló que "... **la Corte Suprema ha resaltado** [CSJN-Fallos, 324:4039, con cita de Clariá Olmedo; confirmando doctrina propia anterior: CSJN-Fallos, 292:561, entre otros] que el imputado "no tiene la carga de probar la disculpa, aunque no aparezca probable o sincera" y que, puntualmente, "**no resulta pertinente deducir el dolo solamente del resultado de la acción**" [sobre la impertinencia de esa deducción, véase igualmente Sancinetti, Dolo y tentativa. ¿El resultado como mito? Acerca de la demostración del dolo por medio del resultado, en "Doctrina Penal", 1986, p. 505].". (DARAY Roberto R. (2022). Código Procesal Penal Federal, 3 Tomos, 3ª Edición, Hammurabi, pág. 790). Sin embargo, con razonable criterio y sin que entonces resulte afectado el estado de inocencia y el núcleo de la regla que deriva de aquel precedente, regulando su alcance desde las reglas de la lógica, se ha atenuado esa doctrina expresándose que cuando el imputado afirma hechos que excluirían la punibilidad, o eventualmente la disminuirían, no se trata de poner en cabeza de este o de su defensa la carga de la prueba de esa afirmación, pero sí es exigible que quien alega esa hipótesis aporte una explicación razonable que pueda ser sustentada [del voto del juez García en CNCCC, Sala I, 18/10/17, causa reg. 1008/17, "Kippke"] (DARAY, Roberto R., ob. cit., pág. 790; el destacado me pertenece).

Por lo expuesto, y sin perjuicio de las disposiciones positivas del nuevo digesto procesal - implementado parcialmente-, lo cierto es que la



interpretación de la ley procesal vigente (CPPN - Ley 23.984) debe conjugarse con las normas de raigambre constitucional que atienden al derecho del imputado a ser oído en el proceso y a establecer su estrategia de defensa activa mediante las proposiciones probatorias que fueran conducentes conforme la imputación, las pruebas reunidas y la plausibilidad de la teoría del caso propuesta.

Cabe señalar que, si bien el principio de libertad probatoria permite al Instructor dirigir la investigación y probar los hechos que son objeto del proceso a través del medio lícito que considere más idóneo, los principios de bilateralidad y contradicción exigen que se valore especialmente la proposición probatoria del imputado y su defensa, en virtud del poder jurídico de resistir los cargos formulados por la acusación y las pruebas que la sustentan, de modo de permitir un adecuado y eficaz ejercicio del derecho de defensa (conf. arts. 73 y 304 del CPPN).

En este orden, no puede soslayarse que el derecho de defensa, parte esencial del debido proceso legal consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional, se integra con el derecho a ser informado, asistido y a disponer de los medios apropiados para ejercer una defensa adecuada y efectiva.

Inmanente a estos postulados se encuentra el derecho a la iniciativa del imputado en la búsqueda y aporte de elementos de prueba, que implica el ejercicio del *‘derecho a la prueba en contrario’*, entendida ésta como la posibilidad de aportar elementos que permitan destruir o morigerar las imputaciones formuladas. Ello, deriva también del principio de paridad de armas o equilibrio entre partes que debe imperar en todo proceso

penal en un Estado liberal y democrático de Derecho (conf.

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN, art. 8.2. de la CADH y art. 14.3. del PIDCyP).

Es por ello que el análisis debe partir del contenido del derecho de defensa del imputado, y su legítima derivación en la facultad de proposición probatoria, con la única limitación de que tales formulaciones no se presenten como dilatorias, impertinentes o sobreabundantes. En caso que así se juzgue, se deberán dar las razones mínimas de su rechazo relacionadas exclusivamente con los extremos de pertinencia y utilidad, a fin de garantizar el debido proceso adjetivo (art. 18 de la Constitución Nacional) (conf. voto de suscripto en autos: "Incidente de reposición en autos CASTILLO, Dina N. por asociación ilícita, inf. art. 310 del CP, inf. Art. 303 inc. 1..." (FCB 70549/2018/61/CA36), auto de fecha 26.10.2023).

Por las razones expuestas, tanto en el pronunciamiento firme de esta Cámara Federal de fecha 01.06.2021, como los argumentos aquí plasmados, de conformidad a la ley aplicable y las circunstancias constatadas en esta causa, he de ratificar integralmente la solución propuesta por el suscripto con fecha 10.04.2024, correspondiendo declarar la nulidad de la resolución recurrida, disponer el apartamiento del Juez Federal de Villa María e instar al Juez Federal que en lo sucesivo intervenga a que procede de acuerdo a las consideraciones expuestas. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN).

El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos, dijo:

I.- Luego de una atenta lectura de los votos emitidos por mis Colegas en orden a las cuestiones

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

USO OFICIAL

planteadas en los recursos de apelación deducidos, en primer lugar, debo destacar que el Suscripto no integró el Tribunal cuando, mediante Resolución de fecha 1° de junio de 2021 revocó las resoluciones dictadas con fecha 19 de diciembre de 2019 y 14 de septiembre de 2020 por el Juzgado Federal de Villa María, por las que había dispuesto la falta de mérito del imputado Plácido Enrique Humanes, en orden a la comisión del delito de evasión al impuesto a las salidas no documentadas agravada por el uso de facturas apócrifas -tres hechos en concurso real-, ordenando proseguir y profundizar la investigación tras advertir la necesidad de producir la prueba sugerida por la defensa, en resguardo del imperativo de objetividad y lealtad procesal, que permita dilucidar los hechos del proceso, en particular, la existencia o no del ánimo doloso del imputado en las conductas enrostradas.

Reparo que en dicha oportunidad se estimó necesario producir la pericia contable para definir, por ejemplo, *"la magnitud del impuesto evadido y la reiteración de supuestas operaciones con los proveedores"*; informes bancarios y registros de operaciones sospechosas para examinar la trazabilidad del circuito financiero de pagos; testimonios de las partes intervinientes en las operaciones -en particular, de los transportistas y/o los distintos camioneros existentes conforme las cartas de porte, para determinar el circuito físico del cereal-; documental y testimonial de los empleados de la empresa que dé cuenta de la existencia de mecanismos estandarizados de prevención del fraude fiscal y su cumplimiento, entre otras diligencias pertinentes y útiles según el caso. Todo ello, a los fines de conformar un escenario al menos indiciario o presuncional que permita ~~aseverar~~ o descartar la imputación penal que se sigue.

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

II.- Ahora bien, dado el derrotero procesal del expediente que ha sido precisado por los Colegas que me preceden en el orden de votación, soy de opinión que aquellas medidas pretendidas, en la actualidad resultan innecesarias los fines de dictar un auto de mérito.

En relación a ello, estimo oportuno efectuar algunas breves consideraciones acerca del alcance que en el ordenamiento procesal corresponde asignarle al auto de procesamiento, tal como está previsto en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

Así, ha de dejarse en claro que el procesamiento constituye una decisión jurisdiccional, de carácter provisional -puede ser revocada o modificada durante el curso de la instrucción y cuando la aparición de nuevos elementos así lo justifiquen (artículo 311 del CPPN) -, mediante la cual el juez, sobre la base de la prueba colectada, valorada conforme las reglas de la sana crítica racional, arriba a la convicción, sin necesidad de que exista certeza plena, respecto de la comisión de un hecho delictuoso y de la culpabilidad del imputado como participe en él (arts. 45 y 46 del Código Penal). Procede entonces en la medida en que exista probabilidad, es decir, cuando -teniendo en cuenta el fin inmediato del proceso penal, cual es la búsqueda de la verdad real- los elementos de cargo existentes generen convicción suficiente respecto de la existencia del hecho ilícito y la responsabilidad penal del imputado.

Por el contrario, la certeza es indispensable en el juicio oral, la cual se obtiene a través de la oralidad e inmediatez del análisis y valoración de la prueba, para decidir, en definitiva.

USO OFICIAL



Si en esta instancia existen pruebas suficientes para emitir un juicio de probabilidad acerca de la presunta comisión del hecho ilícito, corresponde el dictado del procesamiento en virtud del art. 306 del CPPN, por lo que a la luz de tales extremos y de las constancias obrantes en la causa, adhiero a los fundamentos esgrimidos por la Vocal del Tribunal, doctor Liliana Navarro, como así también a los de la parte querellante y Ministerio Público Fiscal -que doy por reproducidos por razones de brevedad- en cuanto a que corresponde ordenar el procesamiento del imputado Plácido Enrique Humanes en orden al delito endilgado; haciendo lo propio respecto de que el Juez instructor deberá pronunciarse sobre la prisión preventiva y embargo a los fines de garantizar la doble instancia, además de instrumentar los medios necesarios para culminar el trámite de la presente instrucción y proceder a su elevación a juicio con la mayor celeridad posible. **ASI VOTO.**

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres:

Puestos estos autos a despacho con motivo de la recirculación del expediente, habiéndose pronunciado nuevamente la Dra. Liliana Navarro en disidencia respecto del voto del suscripto, quien propició en esta oportunidad la revocación del auto de falta de mérito y el dictado del procesamiento del imputado Humanes, con la adhesión del Dr. Eduardo Ávalos, corresponde entonces efectuar las siguientes consideraciones:

I.- En primer lugar, no puedo dejar de señalar que la distinta integración de este Tribunal de Alzada en esta causa obedece a circunstancias ordinarias (v.bg. acogimiento al beneficio jubilatorio de uno de sus miembros) y no modifica la regla de preclusión en el

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

La decisión adoptada en esta causa por esta Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en ejercicio legal de la jurisdicción se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, e impide la modificación de sus términos que ahora se pretende y mucho menos el retrotraimiento a cuestiones tratadas y superadas: tal el caso de la pertinencia y utilidad de la prueba propuesta por la defensa. Al respecto, debo decir que su reedición afecta la garantía a la defensa activa eficaz, al principio de paridad de armas, igualdad procesal, preclusión, progresión y el derecho al recurso.

Advierto, a esta altura, la necesidad de enfatizar en el hecho de que **la valoración sobre la procedencia de las medidas probatorias solicitadas por la defensa técnica ya ha sido resuelta mediante resolución jurisdiccional firme**, sin objeciones sobre su validez, **y debe cumplirse pues se proyecta como garantía procesal esencial de derecho de defensa y debido procesal legal**, cuya inobservancia es sancionada con la nulidad absoluta (conf. art. 18 y 75 inc. 22 de la CN, art. 8.2. de la CADH y art. 14.3. del PIDCyP).

II.- Por otro lado, estimo conveniente reiterar que, en esta causa y por resolución firme, esta Alzada - por mayoría- confirmó la nulidad decretada por el Juez de la causa sobre determinadas medidas investigativas que pretendió adoptar el Ministerio Público Fiscal con intenciones de ampliar el objeto de investigación sin elementos de convicción que lo sustenten, en lo que se conoce vulgarmente como "excursión de pesca". Es decir que, luego del fallo de esta Cámara Federal del 1.06.2021, lejos de adoptar las medidas probatorias ordenadas por

USO OFICIAL

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312

este Tribunal, la representación del Ministerio Público Fiscal actuó en inobservancia del deber de respetar lo ordenado, y de objetividad procesal, al tiempo que desconoció la jurisdicción de este Tribunal y decidió autónomamente rechazar las pruebas propuestas por la defensa y que expresamente este Tribunal consideró que debían producirse -por su pertinencia y utilidad- y que hacían a su derecho constitucional y convencionalmente reconocido.

III.- Con relación al procesamiento que ahora propicia el voto mayoritario, sin perjuicio de lo dicho por este Juez en las distintas ocasiones en las que me pronuncié en estos autos en torno a la nulidad de lo actuado, estimo necesario efectuar unas breves consideraciones subsidiarias.

a) En primer término, considero que la adopción -por la mayoría- de dicho temperamento incriminante en la definición de la situación procesal del imputado Plácido Humanes compromete actual y seriamente la garantía de defensa aludida, y en consecuencia descalificaría a la resolución de esta Alzada como acto jurisdiccional válido. En efecto, sobre esta cuestión se ha sostenido que: *"parece apresurado aseverar que no media arbitrariedad ni afectación del derecho de defensa cuando el instructor no realiza las medidas de prueba solicitadas (CCCFed. Bahía Blanca, Sala II, D.J., 2001-2, pág. 882, f. 15.990); es que cabe analizar si las citas pueden tener éxito y recurrir al arbitrio para cumplir con las prescripciones del ordenamiento (Arzuaga y Coleffi, "Evacuación de cita. Artículo 304 del Código Procesal Penal de la Nación, ¿existe obligación del a quo antes de dictar el procesamiento?"; nota a dicho fallo)"* (D'ALBORA, Francisco





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

Comentado. Concordado”, T. II, 7ª ed., Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, año 2005, p. 650).

b) Asimismo, resulta insoslayable que, en esta causa y con fecha 1.06.2021, esta Cámara Federal definió los requisitos típicos de la figura penal atribuida. En punto a la realización subjetiva del injusto, se señaló que la tipicidad subjetiva solo se satisface mediante dolo directo, lo cual conlleva la necesidad de acreditar su existencia conforme a la prueba reunida y valorada conforme las reglas de la sana critica racional.

Por este motivo, considero incompatible con tal requerimiento típico, menciones tales como que, respecto de Humanes, *“estaba dentro de su ámbito de reserva haberse representado la seria posibilidad de que las operaciones observadas objeto de la presente instrucción, transgredían la normativa penal tributaria”* (Sic, voto de la Dra. Navarro). Dichas conclusiones probatorias se aproximan y ajustan de mejor manera a los requerimientos normativos del “dolo eventual”, el cual resulta insuficiente para atribuir responsabilidad penal por este delito y -reitero- así fue sostenido en el pronunciamiento del 1.06.2021.

Asimismo, debo reiterar que “no resulta pertinente deducir el dolo solamente del resultado de la acción” (Fallos 324:4039). En este caso, el hecho de que los proveedores sean apócrifos (lo cual -por cierto- no ha sido materia de análisis en esta Instancia) no acredita el dolo del autor, es decir, el conocimiento y aprovechamiento de tal carácter por él.

Por ello, con fecha 1.06.2021, esta Cámara Federal de Apelaciones señaló con precisión las medidas probatorias que debían adoptarse y que solicitó la defensa



También debo decir que estas medidas se enderezaban a permitir inferencias probatorias válidas y no en conjeturas generales que podrían o no ser aplicables a este caso. En este sentido, la versión de los hechos dada el imputado y su defensa técnica resulta plausible y razonable y merecedora de investigación judicial, en evacuación de citas y resguardo a su derecho a la prueba y a ejercer una defensa activa eficaz.

En efecto, el art. 73 del CPPN (norma de la Instrucción) dispone: "**La persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles**" (el destacado me pertenece).

que cumple aquélla, siempre que lo considere necesario".



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FCB 8749/2019/CA3

Por su parte, en forma concordante, el art. 304 del CPPN dispone: **"El juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado"** (el destacado me pertenece).

Por lo expuesto y de conformidad a las razones dadas, propicio nuevamente: **I. DECLARAR LA NULIDAD** de la resolución dictada con fecha 14 de septiembre de 2023 por el Juez Federal de Villa María, por las razones brindadas. **II. DISPONER** el apartamiento del Juez Federal de Villa María, doctor Roque Ramón Rebak, debiendo remitirse las actuaciones a la Secretaría de Superintendencia de este Tribunal, a fin de que se designe el Juez que corresponda en lo sucesivo intervenir (conf. art. 172, CPPN). **III. INSTAR** al Juez Federal que en lo sucesivo intervenga, proceda de acuerdo a las consideraciones aquí expuestas por este Tribunal, como así también las oportunamente señaladas mediante la resolución de fecha **01.06.2021**. **IV.** Sin costas (conf. arts. 530 y 531 del CPPN). Así voto.

Por lo expuesto;

SE RESUELVE:

Por mayoría:

I. REVOCAR la resolución dictada con fecha 19 de diciembre de 2019 por el Juez Federal de Villa María, en cuanto dispuso la falta de mérito del imputado, y en consecuencia, **ordenar el procesamiento de Plácido Enrique HUMANES**, como presunto autor responsable del delito de "Evasión agravada por el uso de facturas apócrifas -art. 2 inc. d de la Ley 26.735- Impuesto a las salidas no documentadas".

II. DISPONER que el Juez Federal interviniente se pronuncie sobre la prisión preventiva y embargo, a los



finés de garantizar la doble instancia (art. 310, 312 y 518 del CPPN).

III. INSTAR al Juez Federal que instrumente los medios necesarios para culminar el trámite de la presente instrucción y proceder a su elevación a juicio con la mayor celeridad posible.

IV. Sin costas (conf. arts. 530 y 531 del CPPN).

V. Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES
JUEZ DE CÁMARA
-en disidencia-

LILIANA NAVARRO
JUEZA DE CÁMARA

EDUARDO ÁVALOS
JUEZ DE CÁMARA

MARIO R. OLMEDO
SECRETARIO DE CÁMARA

Fecha de firma: 24/07/2024

Alta en sistema: 25/07/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#33342861#419918246#20240725090129312